



# **TRABAJO FIN DE GRADO**

## **GRADO EN DERECHO**

**CURSO ACADÉMICO 2017 - 2018**

**PERFILES HISTÓRICOS DEL JURADO POPULAR**

**HISTORICAL PROFILES OF THE POPULAR JURY**

**AUTOR:**

**IVÁN RODRÍGUEZ DROBINSKI**

**DIRECTOR:**

**JUAN BARO PAZOS**

## **Resumen**

El Jurado es una institución que ha sido siempre bandera de la democracia y la libertad y que a lo largo de su agitada historia ha levantado las más cruentas pasiones tanto por parte de sus detractores como de sus admiradores.

El objeto de este trabajo es el análisis del recorrido de esta institución a lo largo de la historia de nuestro país, desde su primera mención en el Estatuto de Bayona de 1808 hasta la moderna Ley Orgánica de 1995 que lo regula actualmente. Su finalidad es poder permitírnos estar en situación de poder comprender y reflexionar acerca de las causas que le permitieron estar vigente, y a su vez las que provocaron sus respectivas suspensiones y derogaciones. Todo ello gracias al gran volumen de información sobre la institución que nos ha llegado gracias a los escritos de intelectuales, memorias fiscales, discursos de diputados y demás documentos de la época.

## **Abstract**

The Jury is an institution that has always been a symbol of democracy and freedom, and the level of passions that it has aroused throughout its troubled history has reached both its detractors and admirers.

The aim of this essay is to analyse the journey of this institution throughout the history of our country, since its first official mention in the 1808 Bayonne Statute until the modern 1995 Organic Law that currently regulates the matter. The purpose is to allow ourselves to understand and to reflect on the causes that once let it in force and also led to the suspension and repeal of the Jury.

All thanks to the large amount of information that has been preserved, such as writings of the intellectuals of the time, public prosecutors document, speeches by members of the Parliament and other valuable historical documents.

# ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. CONCEPTO E IDEAS GENERALES
3. LA GERMINACIÓN DEL JURADO EN ESPAÑA: 1808 – 1867
  - I. El Estatuto de Bayona
  - II. El Jurado en la etapa de vigencia de la Constitución de 1812
  - III. El trienio: 1820 - 1823
  - IV. Delitos de imprenta
  - V. Época isabelina: 1833 - 1868
4. CONSTITUCIÓN DE 1869, SEXENIO Y RESTAURACIÓN
5. RESTABLECIMIENTO POR LEY DE 20 DE ABRIL DE 1888
6. LAS SUSPENSIONES DEL JURADO
  - I. Suspensión parcial del Jurado: 1907 - 1920
  - II. Suspensión definitiva en la Dictadura de Primo de Rivera: 1923
7. RESTABLECIMIENTO EN LA II REPÚBLICA: LA CONSTITUCIÓN DE 1931
  - I. La Constitución de 1931: el renacer de la institución
  - II. La Guerra Civil: la desnaturalización del Jurado
8. EL JURADO DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
  - I. El jurado en la Constitución: el artículo 125
  - II. El Jurado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985
  - III. Ley del Jurado de 1995: El Jurado Mixto
9. CONCLUSIONES
10. RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA
  - I. Manuales
  - II. Legislación
  - III. Otros

# 1. INTRODUCCIÓN

El motivo por el que he elegido este tema para realizar mi Trabajo de Fin de Grado en Derecho no es otro que cerrar el círculo que comencé en primero de carrera. Y es que, cuando empecé el grado, la asignatura que más me gustó fue Historia de los Modos de Creación del Derecho. Esto es así porque considero de vital importancia que, para conocer nuestro presente, debamos conocer lo que ha sucedido en el pasado, como la máxima latina “*ubi societas ibi ius*” refleja que, efectivamente, en toda organización social ha de existir el Derecho, siendo este requisito indispensable para poder hablar de sociedad.

En cuanto a la elección del tema en concreto, siempre me ha resultado de gran interés esta institución del Jurado, una institución que no ha dejado indiferente a nadie a lo largo de su recorrido. Que ha tenido sus más acérrimos detractores y defensores a lo largo de los dos últimos siglos, tanto en el ámbito puramente jurídico como en el de la ciudadanía. Y es que la enorme trascendencia de esta figura es innegable y las pasiones que ha ido levantando muy intensas. Un organismo que no es un total desconocido para los españoles, figura común en los noticiarios, tertulias y demás coloquios populares, así como en las películas, encontrando nuestro máximo exponente en la afamada 12 hombres sin piedad<sup>1</sup>. Una institución a la que algunos critican que no se le ha ido prestando la suficiente atención a lo largo de la historia procesal de nuestro país.

La metodología que voy a utilizar es la cronológica. Considero que es la mejor forma para poder explicar las vicisitudes sufridas por esta honorable institución a lo largo de sus más de 200 años de recorrido en España. Estimo también que el conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas es imprescindible en toda investigación histórica, porque a partir de ella se facilita extraordinariamente su consecuente interpretación histórica.

En cuanto a la bibliografía utilizada, comencé leyendo el libro de R.GIBERT “*El juicio por jurados en España*”<sup>2</sup>, que me proporcionó una adecuada visión general acerca de la evolución del Jurado en España. También utilicé el libro de J.A ALEJANDRE “*Justicia Popular en España*”<sup>3</sup> que analiza más en detalle los porvenires de la institución durante los diversos

---

<sup>1</sup> Twelve angry men. Dir.Sidney Lumet. Metro-Goldwyn-Mayer, 1957.

<sup>2</sup> **Rafael Gibert.** *El juicio por jurados en España.* Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Vol 15. Madrid, 1971.

<sup>3</sup> **Juan Antonio Alejandre.** *La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de jurados.* Madrid, 1981.

devenires que la acontecieron. De gran ayuda me sirvió el ensayo de R. GÓMEZ-RIVERO “*El Tribunal del Jurado en Albacete (1886-1936)*”<sup>4</sup>, en especial los juicios recopilados en ella que me ayudaron a hacerme una mejor idea acerca de su funcionamiento más práctico y comprender en mayor medida las críticas que se le hicieron al Jurado en aquellos años. Encontré también de gran utilidad los debates parlamentarios del Congreso de los Diputados anteriores a nuestra Constitución del 78, en los que los diputados esbozaban sus críticas y putos a favor de dicha ley. Por último, mencionar el buscador del diario la Gazeta del Boletín Oficial del Estado donde se han ido publicando todos los decretos y leyes del siglo XIX.

## 2. CONCEPTO E IDEAS GENERALES

Muchas son las distintas definiciones (muy completas en su mayoría) que los distintos autores han aportado sobre el Jurado. Antes de entrar a su definición, estimo conveniente establecer previamente unas ideas que nos ayuden a conceptuarlo.

En primer lugar, cabe decir que cuando se habla del Jurado hay que tener en consideración la acepción del mismo a la que nos referimos. Y es que el Jurado tiene tres acepciones: una primera, que puede referirse al pleno del Tribunal, formado por un lado por jueces de carrera y por otro lado por los jueces legos; una segunda acepción que puede referirse precisamente a aquellos miembros del Tribunal que son legos en derecho, y finalmente una tercera acepción sobre los jueces no profesionales que la conforman.

Seguidamente, habría que intentar establecer el porqué de la terminología de la institución que nos ocupa. Por un lado, hay quienes afirman que está inspirada en los *iudices iurati* romanos, mientras que por otro lado parece más probable pensar, tal y como dice J.A. ALEJADRE, que su origen esté en esa obligación de prestar juramento antes de iniciar su cometido, y que lo desempeñaran “*recta y fielmente*”.

En líneas generales, la definición del Jurado ha sido bastante subjetivada a lo largo de la historia por sus detractores, que destacan sus inconvenientes, o sus defensores que por el contrario subrayan sus ventajas. Cuesta por ello encontrar una definición objetiva y global. Existe sin

---

<sup>4</sup> **Ricardo Gómez-Rivero**. *El tribunal del Jurado en Albacete (1888-1936)*. Diputación Provincial de Albacete. Albacete, 1999.

embargo una hecha por J.ESCRICHE<sup>5</sup> en 1831 que es considerada la definición clásica de Jurado. Lo define como la *"reunión o junta de cierto número de ciudadanos que, sin tener carácter público de magistrados, son elegidos por sorteo y llamados ante el tribunal o juez para declarar según su conciencia si un hecho está o no justificado, a fin de que aquel pronuncie su sentencia de absolución o condenación y aplique en este caso la pena con arreglo a las leyes"*.<sup>6</sup>

De esta definición podemos extraer las siguientes conclusiones:

- *"Reunión o junta de cierto número de ciudadanos"*. Se trata de un órgano colegiado.
- *"Que, sin tener carácter público de magistrados"*. sus miembros no pertenecen al cuerpo de jueces y magistrados, son ciudadanos legos en Derecho.
- *"Son elegidos por sorteo"*. Hace referencia a la forma de elegir a los miembros del Jurado que no es otra que por azar.
- *"Y llamados ante el tribunal o juez para declarar según su conciencia"*. Clara referencia al hecho de que el veredicto del Jurado no será realizado por criterios jurídicos sino por su propio convencimiento acerca de cuál es el mejor resultado.
- *"Si un hecho está o no justificado, a fin de que aquel pronuncie su sentencia de absolución o condenación y aplique en este caso la pena con arreglo a las leyes"*. La competencia del Jurado alcanza cuestiones de hecho, no de derecho.

La definición de la Real Academia Española es bastante similar. Lo define como *"Institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, mediante la cual personas designadas por sorteo contribuyen al enjuiciamiento de determinados delitos, a través de la emisión de un veredicto relativo a la prueba de los hechos"*.

Aclarado lo anterior, me gustaría remarcar cuál es la esencia del Jurado. Una esencia que descansa sobre una división de funciones: por un lado, el Jurado en sentido estricto formado por ciudadanos que serán los encargados de decidir si los hechos que se les exponen son o no constitutivos de delito y por otro, los jueces de carrera encargados de dictar sentencia.

El Jurado, pues, tenía sus más acérrimos detractores y sus más fervientes defensores. Algunos juristas consideran que a la definición antes mencionada habría que añadir ciertas referencias

---

<sup>5</sup> **Joaquín Escriche Martín**, Teruel 1784 – 1847. Abogado, jurista, traductor y político. Famoso por sus muy útiles diccionarios sobre legislación civil, penal, comercial y forense, así como de jurisprudencia.

<sup>6</sup> **Joaquín Escriche Martín**. *Diccionario razonado de legislación y Jurisprudencia*. Tomo segundo, tercera edición, P. 392. Madrid. 1847.

ideológicas. En concreto, insistir en que el Jurado es una institución formada por ciudadanos pertenecientes a todos los estratos sociales y en que su estructura es en principio libre, democrática e independiente. Es más, algunos autores, movidos quizás precisamente por ese terreno ideal e incluso utópico, daban definiciones del Jurado que incluían únicamente palabras que hacían alusión al Jurado como conciencia pública y reflejo de la voluntad del pueblo, una definición que sin duda se queda corta y raya más bien en el plano ideológico.

En este ensayo, analizaré el Jurado desde una perspectiva histórica, comenzando con su primer y tímido reconocimiento en el Estatuto de Bayona de 1808, hasta la moderna Ley del Jurado de 1995.

Comienza aquí mi estudio sobre esta institución, siempre intentando mantener el rigor analítico de un buen historiador, pero teniendo en cuenta en todo momento que quien escribe esto es un jurista (o casi), por lo que se hará mayor hincapié es en el marco normativo, sin perder de vista su conexión con cuantos factores extrajurídicos encuentre por mi camino: políticos, económicos, sociales...

### **3. LA GERMINACIÓN DEL JURADO EN ESPAÑA: 1808 – 1867**

#### **I. EL ESTATUTO DE BAYONA**

Con el Estatuto de Bayona de 1808 se registra el primer intento de establecer en España el juicio por Jurados. En el proyecto de Estatuto Constitucional de 20 de junio de 1808<sup>7</sup> en su artículo 97 se recogía que *“El proceso criminal será público. Se seguirá según las formalidades del proceso por jurados”*. Vemos aquí un intento del Emperador Napoleón de copiar en España la figura del Jurado francés recogida en la Constitución de 13 de Diciembre de 1799, la cual en su artículo 62 dice: *“En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel”*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> España. - Madrid 26 de junio. - El día 20 de junio se congregó en Bayona la junta española en la sala de sus sesiones á la hora acostumbrada, y en esta sesión se leyó un proyecto de constitución para la España, formado por S. M. el Emperador, con su traducción castellana. Acabada la lectura, S. E. el señor presidente habló en los siguientes términos.

Gaceta de Madrid núm. 69, de 27/06/1808, páginas 669 a 670.

<sup>8</sup> *“En materia de delitos que conllevan pena afflictiva o infamante, un primer jurado admite o rechaza la acusación: si es admitida a trámite, un segundo jurado reconoce el hecho; y los jueces, que forman un tribunal de lo penal, aplican la pena. Su juicio no da lugar a la apelación”*.

En las Observaciones sobre el Proyecto de Constitución<sup>9</sup>, se alzaron varias voces pidiendo el aplazamiento de la implantación del Jurado en España. En primer lugar las presentadas por L.M PUREYRA<sup>10</sup>, que comenzó con una dura crítica: *“Decía Voltaire que la historia de Inglaterra no debiera de escribirla otro que el verdugo; y ello es así que en alguna otra parte de Europa han perecido jurídicamente tantos inocentes como desde la más remota antigüedad está establecido el procedimiento por jurados”*. Aunque más adelante, decía de forma más razonada que en España sería preferible reformar los tribunales a introducir una novedad de dudoso resultado.

A lo anterior R. ETTENHARD<sup>11</sup> replicó que los delitos de Estado o lesa majestad no deberían de enjuiciarse de forma pública.

Continuó A. ROMANILLOS<sup>12</sup> limitándose a decir de forma escueta que *“En las primeras Cortes se examinará si será conveniente admitir el proceso por jurados”*.

En la Junta Novena de 27 de junio de 1808 se acordó finalmente *“puesto el asunto a votación, cuarenta y un vocales fueron de sentir que se suspendiese por ahora la admisión del proceso por jurados, y en las primeras Cortes se tratase y examinase si es conveniente admitirle, y los treinta y siete restantes opinaron que no se hiciese variación en el artículo”*.

Se aprueba el 7 de Julio de 1808 la Constitución recogiendo, en su artículo 106 que *“El proceso criminal será público. En las primeras Cortes se tratará de si se establecerá o no el proceso por jurados”*. Vemos que, tras comenzar hablándose del establecimiento del juicio por jurados, se terminó con una promesa de su debate en las Cortes venideras. No se coparía, pues, el sistema francés.

Fue pues el primer intercambio de opiniones acerca de la institución del Jurado que se producía en nuestro país. Habría que esperar entonces cuatro años a que las Cortes de Cádiz se pronunciaran sobre el Jurado, y lo hicieron de la siguiente forma:

---

<sup>9</sup> Diario de Sesiones de las Cortes, observaciones sobre el proyecto de Constitución de 26 de junio de 1808, p. 78 – 81.

<sup>10</sup> **Luis Marcelino Pureyra**, del Consejo de S. M., y alcalde de su Real Casa y Corte. La Coruña, 1754 – 1811. Fue un abogado y político, de carácter afrancesado y consejero de Estado de Jose I.

<sup>11</sup> **Raimundo Ettenhard y Salinas**, diputado del Consejo de la Suprema y general Inquisición.

<sup>12</sup> **Antonio Ranz Romanillos**, ministro del Supremo Consejo de Hacienda.



## II. EL JURADO EN LA ETAPA DE VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Una vez constituidas en 1810 las Cortes españolas en Cádiz, tuvo lugar la discusión sobre la aprobación de la ley de imprenta que acabó tomando la forma de Decreto IX Libertad Política de la Imprenta de 10 de noviembre de 1810.<sup>13</sup> Esta fue una primera oportunidad propicia para poder instaurar el Jurado para los delitos de esta índole. El artículo 5 del proyecto de ley había quedado redactado en los siguientes términos: *“Los tribunales ordinarios entenderán en la averiguación, calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la imprenta”*. Finalmente, este artículo quedó redactado en los siguientes términos: *“Los Jueces y Tribunales respectivos entenderán en la averiguación, calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la Imprenta, arreglándose a lo dispuesto por las leyes y en este reglamento”*.<sup>14</sup>

Nótese que se cambió *“Tribunales ordinarios”* por *“Jueces y Tribunales respectivos”*. Podría caber una interpretación de que en cierta forma se dejaba la puerta abierta a que estos delitos fueran juzgados en un futuro por el Jurado, pero al final nada se discutió en el debate acerca del Jurado, ni nada se dijo en los proyectos de la ley ni en su redacción final como decreto.

Hubo que esperar un año más para que se procediera por fin al debate sobre el tema del Jurado. La Comisión de Constitución había redactado un artículo, el 305, que decía: *“Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y de derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente”*. Dicho artículo pasó sin alteración alguna a formar parte del artículo 307 de la Constitución.

Se produjo pues un breve debate el 13 de diciembre de 1811<sup>15</sup>. Se quejaba el diputado J.MARTÍNEZ<sup>16</sup> de que este artículo *“es un mero consejo, no un precepto”* y que bien *“se podrá*

---

<sup>13</sup> Real decreto por el que quedan abolidos los actuales juzgados de imprentas y la censura de las obras políticas precedente a su impresión.

Gaceta de la Regencia de España e Indias núm. 95, de 15/11/1810, páginas 908 a 910.

<sup>14</sup> Diario de Sesiones de las Cortes Generales Extraordinarias, sesión de 20 de octubre de 1810, p.55.

<sup>15</sup> Diario de Sesiones de las Cortes Generales Extraordinarias, sesión de 11 de diciembre de 1811, p.2420

<sup>16</sup> Presumiblemente el diputado **José Martínez de Hervas**. En el archivo histórico del Congreso de los diputados sólo se dice que se llama José Martínez y es diputado por Valencia. Es comprensible que ante tan común nombre y apellido es difícil precisar que efectivamente se trata de este José Martínez al haber habido bastantes diputados con ese nombre, incluso en las Cortes de Cádiz, pero es el único que figura como diputado por Valencia en el índice Histórico de Diputados de la página del Congreso. Fue pues un hacendista y político español diputado por

*suprimir este artículo pues es bien sabido que las Cortes futuras tendrán esta facultad*". Al final el artículo viene a decir lo mismo que el Estatuto de Bayona, que es postergar la decisión y dejarla en manos de las Cortes, siempre para un futuro.

Opinión distinta tenía al respecto el presidente de la Comisión Constitucional MUÑOZ TORRERO<sup>17</sup> que replicaba que se trataba no de *"un mero consejo sino una declaración positiva de las facultades que acerca de este particular deben tener las futuras Cortes"*.

Este argumento no convenció al diputado GOLFIN<sup>18</sup>, que pedía que *"este artículo se ponga en tono imperativo, de modo que sea un verdadero precepto, porque de lo contrario, no veo un medio para que la inocencia quede asegurada de la arbitrariedad y despotismo"*.

Acabo el debate el señor A. ARGÜELLES<sup>19</sup> defendiendo a la Comisión alegando que esta *"no creyó necesario poner el artículo en términos imperativos, porque no le era fácil, ni aun posible, fijar la época en que desearía verificarse una medida tan importante"*.

De nuevo tuvo que quedar postergada la instauración de esta noble institución.

### III. EL TRIENIO: 1820 - 1823

La vuelta del absolutismo en 1814 provocó un freno en la posibilidad de instaurar en España el juicio por jurados. Lo que resulta positivo de este periodo es que el Jurado ya había dejado de ser una institución casi desconocida en nuestro país. Gozó de gran popularidad en la época de los primeros meses del trienio la obra de sir R. PHILLIPS *On the powers and duties of Jury*<sup>20</sup>,

---

Valencia (Granada 1760 – 1830), afrancesado partidario de Jose I y que llegó a ser ministro de Policía y de Hacienda.

<sup>17</sup> **Diego Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano**, Badajoz 1761 – 1829. Sacerdote, catedrático en Filosofía por la Universidad de Salamanca, diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz y durante el Trienio. De grandes ideas liberales, fue un acérrimo defensor de la libertad de imprenta.

<sup>18</sup> **Francisco Fernández Golfín**, Badajoz 1771 – 1831. Militar y político, diputado por Extremadura en las Cortes de Cádiz y durante el Trienio.

<sup>19</sup> **Agustín de Argüelles Álvarez**, Asturias 1776 – 1844. Abogado, político y diplomático, diputado por Asturias durante las Cortes de Cádiz, el Trienio y las Constituciones de 1837 y 1845.

<sup>20</sup> *De las facultades y obligaciones de los jurados* que data de 1810. Sir Richard Phillips (1767 – 1840) fue un eminente maestro de escuela, autor y editor londinense. Destaca también su obra de 1811 *Las leyes criminales de Inglaterra*.

habiendo sido traducida al francés en 1811 por A. COMPTE<sup>21</sup> y posteriormente al castellano. Esta obra, que alababa el éxito cosechado por el Jurado en el sistema inglés, fue sin embargo despreciada en Francia por el régimen imperial de Napoleón. Phillips hablaba de las bonanzas del Jurado y de los peligros que corría. Un Jurado formado por doce hombres, que no podían ser cualesquiera. Afirmaba que no podían formar parte del mismo aquellas personas indignas, las que hubieran viajado largo tiempo por países lejanos o aquellos dedicados al estudio del derecho, los empleados o los médicos. Defendía él la unanimidad en las decisiones del Jurado, sin embargo, el traductor español anotó que él consideraría mejor un sistema en el que la decisión fuera tomada por mayoría de dos tercios.

Destaca también en esta época la obra de S.JONAMA<sup>22</sup> *De la prueba por Jurados o sea, consejo de hombres buenos* publicada en Madrid en 1820. Abogaba por que los miembros del Jurado tuvieran a su nombre alguna propiedad, como prueba de su independencia económica y que tuvieran de entre 30 y 40 años de edad, al considerar que con una edad menor no se es capaz de diferenciar *“la impostura de la inocencia”*.

La primera vez que se discute la cuestión del Jurado en las Cortes viene de mano del diputado MARCIAL<sup>23</sup>, que señalaba las grandes y obvias ventajas que a su parecer tenía esta institución para nuestro país, y en concreto que *“el establecimiento de unos jueces que siendo iguales con el acusado, de encargo transitorio, interesados en que el orden y tranquilidad pública se mantengan, de lo cual y del grande beneficio que puede resultar a la moral pública”*.<sup>24</sup>

Habló de esta forma el diputado J. CAÑEDO<sup>25</sup> el 7 de agosto: *“Si las Cortes conceden a los españoles estos admirables medios de defensa, podrán lisonjearse de estar á nivel en esta*

---

<sup>21</sup> **Auguste Comte**, Montpellier 1798 – 1857. Filósofo francés considerado el padre del positivismo y la sociología.

<sup>22</sup> **Santiago Jonama**, Girona ¿ - 1823. Lingüista, político y diplomático. Partidario del rey, con la Revolución cambió rápidamente de parecer pasando a ser un ferviente liberal.

<sup>23</sup> **Marcial Antonio López Quilez**, Zaragoza, 1788 – 1857. Fue diputado por Zaragoza en las Cortes entre 1820 y 23. Posteriormente se exilió a Francia de donde volvió años más tarde para ser secretario de María Cristina de Borbón.

<sup>24</sup> Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 21 de julio de 1820, P.228.

<sup>25</sup> **Juan de Dios Cañedo**, Guadalajara, México, 1786 – 1850. Abogado, embajador y diputado por el Virreinato de Nueva España en las Cortes de Cádiz y durante el Trienio. Tuvo un importante rol en la Independencia de México.

*materia con las dos naciones de la tierra que han hecho más servicios a la humanidad, a saber: la Inglaterra, y principalmente los Estados-Unidos de América”.*<sup>26</sup>

En poco menos de un mes se procedió a discutir en Cortes la proposición de este diputado tan amigo del jurado<sup>27</sup>. Decía el propio Marcial que *“Qué hermoso cuadro el de una asociación de hombres llamados por la ley para la función más augusta de la sociedad...”*. Describiendo lo necesario que era para España adquirir esta institución ya presente en las potencias de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Como podemos ver, eran comunes las comparaciones con las grandes potencias ilustradas de la época en una suerte de qué si estas nobles naciones tienen el Jurado, ¿cómo no va a tenerlo España?

Lo secundó un entusiasmado DEL MORAL<sup>28</sup>, que se explayó en un largo discurso para que se instauraran al fin los Jurados en materia criminal. Defendía que *“no se diga que la Nación no está preparada para recibir una institución en que fundan su libertad los pueblos felices que la han adoptado”*. Siempre poniendo como ejemplo el resto de países que la han adoptado y alegando que ya bastaba de postergar su instauración, que el pueblo español estaba más que listo.

Continuó un prudente VICTORICA<sup>29</sup>, que decía compartir *“los luminosos principios que acaban de sentar los dos señores proponentes”*. Pero que sin embargo ahora debían de ser motivo de discusión otros temas de mayor importancia.

Un realista GASCÓ<sup>30</sup> añadió que, pese a las bondades del Jurado, España todavía no estaba preparada por diversos motivos entre los que destacan que *“tenemos por nuestra desgracia una porción de ciudadanos que no saben leer”*, y que *“debemos esperar a tener un Código Criminal más adecuado a la naturaleza del corazón humano”*.

---

<sup>26</sup> Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 7 de agosto de 1820, P. 414 – 415.

<sup>27</sup> Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 15 de agosto de 1820, P. 522 – 526.

<sup>28</sup> **Antonio Díaz del Moral** fue diputado por Granada durante las legislaturas de 1813-1814 y 1820-1822

<sup>29</sup> **Miguel de Victorica**, eclesiástico diputado primero por Burgos y luego por Cádiz durante 1820-1822

<sup>30</sup> **Francisco de Paula Fernández Gascó**, Madrid 1768-1826. Diputado en el Trienio por Madrid. Fue ministro de Gobernación.

Resume MARTÍNEZ DE LA ROSA<sup>31</sup> que todos están de acuerdo en que el Jurado es positivo, pero que él es también de la opinión de que todavía la nación no está preparada. Que ya va a poner la Comisión de Imprenta el Jurado en ese tipo de delitos, y que esa será pues una especie de ensayo o tentativa para *“ver cómo se aclimata, digámoslo así, esta planta extranjera en nuestro hermoso suelo”*.

Concluye un exaltado MORENO GUERRA<sup>32</sup> diciendo que *“se dice que el pueblo no tiene bastante ilustración para recibir este establecimiento. Pues, Señor, ese pueblo tan ignorante, ese pueblo tan estúpido es el que nos ha elegido y el que nos ha puesto aquí para que le dirijamos y hagamos su bien, y es constante que sin los jurados no puede haber libertad civil...”*.

La cuestión acerca de si está lo suficientemente preparada la sociedad española para ser jueces de hecho en un Jurado no será algo exclusivo de este capítulo, sino que nos irá acompañando a lo largo de toda la historia de la institución hasta nuestros días.

#### IV. DELITOS DE LIBERTAD DE IMPRENTA

Se anticipó la cuestión del Jurado con motivo de la Ley de Imprenta. Volvía a la carga DE LA ROSA diciendo que *“más si es tan saludable esta institución en todas las causas criminales, cuando se trata de calificar impresos no es solo provechosa, sino absolutamente necesaria, si se ha de conservar ilesa la libertad de imprenta”*.<sup>33</sup>

Continuaba más adelante alegando que *“no podría subsistir largo tiempo, por más precauciones que se tomaran en su defensa, si dependiera de jueces permanentes el fallar sobre una clase de delitos, que lejos de poder sujetarse a reglas fijas por la ley, han de depender en gran manera del juicio particular de cada hombre. Pero adoptada la institución de jueces de hecho, desaparecen de una vez todos los inconvenientes; descansa segura la inocencia, y no puede el crimen lisonjearse de la impunidad”*.

---

<sup>31</sup> **Francisco de Paula Martínez de la Rosa**, Granada 1787- 1862. Diputado, poeta, dramaturgo y catedrático de filosofía. Liberal moderado durante el Trienio (doceañista), fue Ministro de Estado en 1822. Fue uno de los inspiradores del partido moderado en 1834.

<sup>32</sup> **José María Moreno de Guerra**, Córdoba 1777 – 1877. Fue un periodista y diputado por Córdoba durante el Trienio.

<sup>33</sup> Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 15 de septiembre de 1820, P. 1025 – 1027

Cabe destacar por supuesto la necesaria referencia al derecho comparado: *“El solo establecimiento de jurados ha bastado ti conservar en Inglaterra por espacio de un siglo la libertad de imprenta, sin tener ni una sola ley sobre la materia...”*

Finalmente, se promulga el 22 de octubre de 1820 el Decreto LV Reglamento acerca de la libertad de imprenta<sup>34</sup> cuyo título VII (artículos 36 a 68) habla de los Jurados. Serían los ayuntamientos de capital de provincia quienes elegirían 18 personas que fueran (artículo 39) *“ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años, y residente en la capital de la provincia”*.

Cuando se presentara escrito de denuncia (artículo 43), *“uno de los alcaldes constitucionales, acompañado de dos regidores y del secretario del ayuntamiento, hará sacar por suerte cinco cédulas de las 18 en que estarán escritos los nombres de los jueces de hecho...”*.

Continúa en el artículo 52 con *“antes de establecerse el juicio debe el alcalde constitucional pasar al juez de primera instancia una lista certificada de los siete jueces de hecho que han de calificar el impreso, los cuales habrán sido sacados por suerte de entre los 13...”*.

Estos siete jueces se suman a los otros cinco formando el Jurado de calificación, presidido por juez letrado en juicio a puerta abierta. Las decisiones se toman por mayoría absoluta de votos de acuerdo con el sistema francés.

Continuaron intensos debates en el Congreso durante el mes de septiembre y octubre de ese año por diputados que no tenían gran entusiasmo por la institución. Creo que es interesante destacar la intervención de CALATRAVA<sup>35</sup>, el cual se manifestó totalmente en contra de esta institución. De nuevo se volvía al derecho comparado, y es que él defendía que el Jurado podría ser bueno para Reino Unido, pero *“podrá no serlo ahora en España”*.<sup>36</sup> Sus razones no eran otras que dudar de la cultura del español medio, alegando que poco puede decir alguien que no sabe leer sobre la imprenta.

---

<sup>34</sup> Artículo de oficio. - Madrid 4 de diciembre. Real decreto de 22 de octubre de 1820 regulando la libertad de imprenta.

Gaceta del Gobierno núm. 162, de 05/12/1820, páginas 727 a 729.

<sup>35</sup> **José María Calatrava Peinado**, Mérida 1781 – 1846. Fue magistrado del Tribunal Supremo durante el Trienio. Además de ser diputado por Extremadura, Madrid, Castellón y Badajoz durante las Cortes de Cádiz, el Trienio y desde 1837 hasta 1843.

<sup>36</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 26 de septiembre de 1820, P. 1260.

Incluso fue más allá el diputado LOBATO<sup>37</sup>, que consideraba que *“no es necesario saber leer ni escribir para tener sentido común, y he conocido muchos que ignoraban lo uno y lo otro y sin embargo sabían más que yo...”*,<sup>38</sup> para luego contradecirse brutalmente al decir que los jurados debían ser hombres de carrera con años de jurisprudencia a sus espaldas. Nada había entendido.

Interesantes aportaciones hizo FLOREZ ESTRADA<sup>39</sup> defendiendo al Jurado comparándolo de nuevo con Reino Unido y añadió que en España había mucho *“leguleyo”*, muchos que se creían que *“la voluntad del príncipe es la única ley”*.<sup>40</sup> Una ácida crítica al sector más conservador de los moderados.

Por último, me gustaría añadir las contestaciones de los ofendidos diputados andaluces MORENO GUERRA y DÍAZ DEL MORAL que decían que *“esa nación que se supone estúpida, y donde generalmente no se sabe leer y escribir, es la misma que nos ha enviado aquí y confiado su destino. Y yo añadiré que nosotros, sin venir de Atenas ni de Roma, sino saliendo del seno de esa misma Nación que no está preparada para tener jueces de hecho, y sin más requisitos que 25 años cumplidos y estar en el pleno goce de los derechos de ciudadanos, estamos aquí para legislar en los asuntos más graves y decidir en las controversias más difíciles”*.<sup>41</sup>

En lo que respecta a la experiencia juradista de la institución, fue demasiado breve para poder emitir una crítica detallada. De acuerdo a J.A. Alejandro y a Joaquín Escriche, fue más bien una experiencia fracasada. No sólo porque estuvo funcionando tan solo hasta la Restauración llevada a cabo en 1823, sino por sus deficiencias. Principalmente en lo que respecta a la elaboración de las listas, compuestas por los ayuntamientos por aquellos de semejante afinidad política. Ello provocaba que, en el marco de la libertad de imprenta, estos jueces de hecho se mostrarían totalmente en contra de aquellos escritores de ideología distinta. Una institución que

---

<sup>37</sup> **Benito Lobato y Caballer**. Fue un clérigo y diputado por León durante el Trienio. Fue un liberal moderado y llegó a ser deán de la catedral de Salamanca.

<sup>38</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 6 de octubre de 1820, P. 1456.

<sup>39</sup> **Álvaro Flórez Estrada**, Asturias 1765 – 1853. Fue un economista, magistrado, abogado y diputado por Oviedo durante el Trienio y elegido 7 veces más desde 1834 hasta 1843.

<sup>40</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 26 de septiembre de 1820, P. 1266 – 1267.

<sup>41</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 3 de octubre de 1820, P. 1380

debería ser el emblema de la libertad y la justicia generalmente distó mucho de serlo en esta breve etapa.

## V. ÉPOCA ISABELINA: 1833 – 1868

La restauración absolutista de 1823 trajo consigo un largo silencio para la institución, roto tan sólo por vez primera con la llegada de la Constitución de 1837 que en su artículo 2 instauraba que *“La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados”*. En cuanto al resto de delitos, el art 1º de los artículos adicionales prometía que *“Las leyes determinarán la época y el modo, en que se ha de establecer el juicio por jurados para toda clase de delitos”*.

Finalmente, por ley de 17 de octubre de 1837, poco después de aprobarse la Constitución, se volvió a aprobar el Jurado para los delitos de imprenta en el mismo régimen que el establecido en el Trienio.

Así continuó hasta el 10 de abril de 1844<sup>42</sup>, cuando fue modificada por el Real Decreto sobre Reforma de la Legislación de Imprenta. Tales reformas se encontraban precisamente en su Título VIII *“De la organización del Jurado”* (artículos 53 a 64), y buscaban convertir al Jurado en una institución de más difícil acceso, de mayor alcurnia. Las más trascendentes fueron elevar la edad mínima para formar parte de 25 a 30 años, incluir determinados requisitos de nivel de renta para poder ser elegidos, así como limitar a las capitales de provincia la formación de listas y celebración de juicios. Todo ello en el marco de la Ley de Imprenta de 6 de julio de 1845<sup>43</sup>, que nada decía sobre los Jurados, y en su lugar preveía un Tribunal especial formado por un magistrado y cinco jueces de primera instancia

Pero peores tiempos habrían de llegar, pues con la llegada de la Constitución moderada de 1845 nada dijo esta sobre el Jurado. Más adelante, un Decreto de 6 de julio de ese año interpretaba el silencio suprimiendo el Jurado al modificar el Decreto de abril de 1844 y establecer en su artículo 4 que: *“La calificación de los delitos de imprenta y la aplicación de la pena se harán*

---

<sup>42</sup> Real decreto sobre la necesidad de reformar la actual legislación de imprenta se decreta que se observe, guarde y cumpla en todas sus partes lo citado.

Gaceta de Madrid núm. 3497, de 11/04/1844, páginas 1 a 4.

<sup>43</sup> Real decreto modificando o aclarando algunos artículos del de 10 de abril de 1844 relativo al uso de la libertad de imprenta.

Gaceta de Madrid núm. 3955, de 13/07/1845, páginas 1 a 2.



*en lo sucesivo por un tribunal compuesto de cinco jueces de primera instancia y de un magistrado presidente”.*

Posteriormente, se sucedieron una serie de convulsos tiempos para esta institución. Volvió a entrar en vigor el 2 de abril de 1852<sup>44</sup>, que permanecería vigente tan solo un año, hasta la llegada de otro Decreto de 2 de enero de 1853<sup>45</sup> que introdujo modificaciones en el mismo y, por lo que al Jurado compete, establece en su artículo 7 que: *“un tribunal de jueces de primera instancia, organizado de la manera que se dirá más adelante, conocerá de todos los delitos de imprenta, con excepción de los cometidos contra particulares y salvas las restricciones que contiene el artículo 5 de este Real Decreto”*. Por lo que básicamente se regresaba al régimen de 1845, sólo para volver a ser utilizado con la llegada del Bienio Progresista confirmado por ley de 21 de diciembre de 1855.<sup>46</sup> La Constitución no promulgada de 1856 también hablaba del Jurado en su art 3: *“La calificación de los delitos de imprenta corresponde a los Jurados, salvas las excepciones que determinen las leyes”*, incluso en su art 73 iba más allá *“Las leyes determinarán la época y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos, y cuantas garantías sean eficaces para impedir los atentados contra la seguridad individual de los españoles”*. En 1856 el Acta adicional a la Constitución de 15 de septiembre de 1845 declaraba en su art 1: *“La calificación de los delitos de imprenta corresponde a los Jurados, salvas las excepciones que determinen las leyes”*, que tuvo una vigencia cortísima, de apenas un mes, pues fue dejada sin efecto por un decreto de 14 de octubre

---

<sup>44</sup> Real decreto estableciendo reglas para el ejercicio de la libertad de imprenta. Gaceta de Madrid núm. 6496, de 05/04/1852, páginas 1 a 4.

<sup>45</sup> Real decreto modificando el de 2 de abril de 1852 y estableciendo reglas para el ejercicio de la libertad de imprenta. Gaceta de Madrid núm. 5, de 05/01/1853, páginas 1 a 2.

<sup>46</sup> Ley declarando a quien corresponde el conocimiento de los delitos de Imprenta. Gaceta de Madrid núm. 1083, de 22/12/1855, página 1.

de 1856.<sup>47</sup> El 13 de julio de 1857<sup>48</sup> se restablecía la ley de imprenta de 1845 dejando de nuevo sin efecto el Juicio por Jurados<sup>49</sup>.

Pero aún habría de volver a la vida el Jurado una vez más antes de la revolución Gloriosa de 1868. El 22 de junio de 1864 se aprueba una nueva Ley de Imprenta<sup>50</sup> que modifica algunos artículos de la de 1857 debido a las nuevas ideas, más liberales, en el ámbito social, político e ideológico. En lo que respecta al Jurado cabe decir que se modifican los artículos 38 y 39 restableciendo los Jurados, pero acompañados de un cuerpo de Jurados elegidos de entre los mayores contribuyentes de la tierra, la industria o el comercio; de los miembros más antiguos y que paguen más alta cuota de las Reales Academias o de los Abogados que paguen más cuota al Colegio de Abogados. Se amplía el arco social de donde pueden provenir los jueces de hecho respecto a lo recogido en 1852, si bien es el matiz económico el que prima. La edad para ser jurado se rebaja y queda establecida en 28 años (artículos 40 y ss.).

El Jurado finalmente desaparecería también de los delitos de imprenta, y por tanto no tendría cabida en nuestro ordenamiento jurídico, en los últimos tiempos de vigencia de la Constitución de 1845, con el Real Decreto de 7 de marzo de 1867<sup>51</sup>, con el que daba virtualidad la Reina al Proyecto de Ley sobre libertad de imprenta.

Resumiendo, podemos decir de esta etapa isabelina que, salvo los intervalos antes mencionados, mientras estuvo vigente la Constitución de 1845, el Jurado no tuvo virtualidad en España.

---

<sup>47</sup> Real decreto mandando que solo rija y se observe la ley constitucional de la Monarquía promulgada en 23 de mayo de 1845, sin perjuicio de lo que de acuerdo con las Cortes se determine sobre las disposiciones contenidas en el Acta adicional a que se refiere el Real decreto de 15 de Setiembre último.  
Gaceta de Madrid núm. 1382, de 16/10/1856, página 1.

<sup>48</sup> Ley de imprenta mandando que se haga cumplir a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas.  
Gaceta de Madrid núm. 1652, de 14/07/1857, página 1.

<sup>49</sup> *“un tribunal de Jueces de primera instancia (...) conocerá de todos los delitos de imprenta”* (Artículo 37).

<sup>50</sup> Ley reformando la de 13 de Julio de 1857 sobre el ejercicio de la libertad de Imprenta.  
Gaceta de Madrid núm. 197, de 15/07/1864, páginas 1 a 2.

<sup>51</sup> Real decreto aprobando el adjunto proyecto de ley sobre libertad de imprenta.  
Gaceta de Madrid núm. 67, de 08/03/1867, página 1.

#### 4. CONSTITUCIÓN DE 1869, SEXENIO Y RESTAURACIÓN

Con el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868, comienza así el llamado Sexenio Democrático caracterizado por el triunfo de liberales, moderados y republicanos y el exilio de la reina Isabel II.

Fueron convocadas y elegidas Cortes con el objeto primordial de elaborar una nueva Constitución, pero, además, y como ocurriera en Cádiz, las Cortes desarrollaron una profusa labor legislativa.

El Proyecto de Constitución, por lo que a nuestro tema interesa, recogía en su artículo 93: “*Se establecerá el juicio por Jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que determine la Ley. La Ley determinará también las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de Jurado*”. Esta fue finalmente también la redacción final del artículo. Pero huelga decir que algunos diputados intentaron enmendarlo<sup>52</sup>, sobre todo a fin de que estuviera enunciado en presente y no en futuro.

Destaca la propuesta por RODRIGUEZ PINILLA<sup>53</sup> que decía “*queda establecido el jurado para pronunciar inapelablemente sobre los hechos en todo juicio criminal que no verse sobre...*”. Nótese aquí el fuerte hincapié en que ya no bastaban más promesas de instaurar el Jurado, sino que había que hacerse, y lo antes posible.

Pero otra línea seguía sin embargo CISNEROS<sup>54</sup>, que pedía que el artículo se redactara de la forma siguiente: “*las leyes determinarán la época y el modo en que ha de establecerse el juicio por jurados para toda clase de delitos*”. Es decir, regresar a la situación de siempre, la eterna postergación.

Como he dicho, finalmente las enmiendas no se aprobaron y la redacción del artículo 93 quedó tal cual estaba. Es significativo que ahora no se pospone a lo que decidan otras Cortes, sino que el artículo es imperativo en su redacción: “*Se establecerá el juicio por Jurados...*”. Añadir que entra en vigor el Jurado para toda clase de delitos, no solamente para los delitos de imprenta,

---

<sup>52</sup> Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 22 de mayo de 1869, P. 2247 – 2249.

<sup>53</sup> **Tomas Rodríguez Pinilla**, Salamanca 1815 – 1886. Diputado por Salamanca en 1854, 1869 y 1872. Fue miembro del partido Demócrata.

<sup>54</sup> **Enrique de Cisneros y Nuevas**, Sevilla 1826 – 1889. Diputado por Ciudad Real en 1869, 1876 y 1879.

como había ocurrido hasta entonces y que no fracasaría como en 1808, 1812, 1837 y 1856. Ahora por fin, llegan buenos tiempos para esta institución.

El 15 de septiembre de 1870 se aprueba *la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial*. Y es en su artículo 276<sup>55</sup> el que nos habla de la intervención del Jurado en los procesos más graves, de manera que debía intervenir, junto a las Salas de lo criminal de las Audiencias, en el conocimiento de las causas por delitos con pena superior a presidio mayor, así como en los de lesa majestad, rebelión y sedición. Cabe decir que estos delitos son los más graves, sí, pero también son los menos frecuentes. También esta ley en su disposición transitoria 3ª nos habla de llevar a cabo una reforma del Jurado de forma que “*satisfaga las exigencias de la justicia*”.<sup>56</sup>

Con estas palabras hablaba EUGENIO MONTERO RÍOS<sup>57</sup> del Jurado en el discurso de apertura de los Tribunales del 11 de Julio de 1872: “*Sea cualquiera la opinión que se profese acerca del origen y del carácter político del Jurado... es, pues, el Jurado una necesidad inevitable de estos tiempos; es una condición de vida en un pueblo libre, que recibimos con aplauso los que política y científicamente somos sus defensores, y a la que tendrán que resignarse sus adversarios como se resigna siempre el hombre ante la fatalidad de los hechos*”.<sup>58</sup>

Continuaba después alabando a la institución, defendiéndola, y dejando claro que nada debían temer los jueces de derecho, pues no es el Jurado un rival, sino un amigo.

---

<sup>55</sup> Art. 276. “Corresponderá a las Salas de lo criminal de las Audiencias: (...)

2.º Conocer con intervención del Jurado:

*De las causas por delitos a que las leyes señalan penas superiores a la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, según la escala general. De las causas, cualquiera que sea la penalidad que las leyes impongan, por delitos: De lesa majestad. De rebelión. De sedición”.*

<sup>56</sup> “Disposiciones Transitorias

I. Procederá el Gobierno a:

3.º A reformar los procedimientos criminales con sujeción a las siguientes reglas:

i) Organización del Jurado de modo que, por sus condiciones de capacidad e imparcialidad, asegurada por el derecho de recusación, satisfaga las exigencias de la justicia”.

<sup>57</sup> **Eugenio Montero Ríos**, Santiago de Compostela, 1832 – 1914. Fue político y jurista. Diputado por Pontevedra, Madrid y La Coruña desde 1869 a 1886. Fue también Ministro de Gracia y Justicia desde 1870 a 1873 y de 1892 a 1893, y Ministro de Fomento de 1885 a 1886. Fue también presidente del Tribunal Supremo en 1888.

<sup>58</sup> Madrid, 11 de julio de 1872. Gaceta de Madrid de 16 de julio de 1872.

Más tarde, gracias al Real Decreto de 22 de diciembre de 1872 que promulga *la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal*, se regulaba el juicio oral ante el tribunal popular, y por la Real Orden de 28 de diciembre, que regulaba su funcionamiento.<sup>59</sup>

Voy a extenderme brevemente en la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal porque, además de ser la primera gran Ley que se ocupa del Jurado, tendrá gran influencia en la Ley del Jurado de 1888.

El título IV de la Ley comienza a ocuparse del Jurado: “*Del juicio oral ante el jurado*”. Su Capítulo I: “*De la composición del tribunal del Jurado*”, recoge los capítulos 658 a 660. El artículo 658 nos habla de la composición del mismo que será: “*El tribunal del Jurado se compondrá de 12 Jurados y de 3 Magistrados*”. En lo que respecta a la declaración que habrá de hacer el Jurado, el artículo 659 nos dice que “*Los Jurados declararán la culpabilidad ó inculpabilidad del procesado respecto de los delitos que fueren objeto de la acusación y de la defensa*”. Continúa diciendo que además “*podrán declarar también la culpabilidad del procesado por un delito menos grave que el que hubiere sido objeto de la acusación*”.

El capítulo II: “*De la competencia del Tribunal del Jurado*”, recoge en el artículo 661 los delitos en los que podrá intervenir el mismo y establece, además de los delitos con pena superior a presidio mayor y otros delitos especificados en el Código Penal, los delitos cometidos por medio de la imprenta u otro medio mecánico de publicación (se exceptúan aquí los delitos de injuria y calumnia cometidos por estos medios contra particulares). Hasta aquí la Ley es heredera de la legislación precedente. Lo novedoso es la regulación que establece de la competencia del tribunal popular en los delitos definidos y penados en la Ley Electoral. Además, el artículo 662 nos dice que será también competente el Tribunal del Jurado para conocer de los delitos conexos con alguno de los mencionados en el artículo anterior y el artículo 663 exceptúan de lo dispuesto en este capítulo los delitos cometidos por personas que estuvieren sometidos a la jurisdicción del Tribunal Supremo.

El capítulo III dispone en los artículos 664 y 665 las circunstancias necesarias para ser Jurado, a saber:

---

<sup>59</sup> Circular expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia encareciendo a las Autoridades judiciales y del Ministerio fiscal la adopción inmediata de las disposiciones que crean convenientes para el planteamiento de la nueva ley de Enjuiciamiento criminal, y muy particularmente en la parte referente al Jurado. Gaceta de Madrid núm. 365, de 30/12/1872, página 1021.

Artículo 664. *“Para ser Jurado se requiere: 1. ° Ser español. 2. ° Ser mayor de 30 años. • 3. ° Estar en el pleno goce de los derechos políticos y civiles. 4. ° Saber leer y escribir. 5. ° Tener la cualidad de vecino en el término municipal respectivo. 6. ° Hallarse incluido como cabeza de familia, con casa abierta, en las listas que deberán formarse en cada uno de los términos municipales”*.

Artículo 665. *“Podrán también ser Jurados los españoles mayores de edad, que estando en el pleno goce de los derechos políticos y civiles, aunque no sean cabezas de familia con casa abierta, se hallen incluidos en la lista de capacidades que se formará en cada término municipal. Se considerará como capacidad el que tuviere un título profesional o hubiere desempeñado algún cargo con la categoría de Jefe de Negociado de Administración”*.

Más adelante, el artículo 666 nos enumera una lista de aquellos que no reúnen las capacidades para ser jurado (los impedidos física e intelectualmente, los que se hallen. procesados criminalmente, si contra ellos se hubiese dictado auto de prisión...). El artículo 667 establece una serie de incompatibilidades (con cualquier otro del poder judicial o del Ministerio fiscal, con el servicio militar, con el de Maestro de escuela y Médico titular del Municipio...). Y para terminar el artículo 670 nos presenta los motivos para poder excusarse de ser Jurado.<sup>60</sup>

Por desgracia, la inestabilidad de los tiempos llevará a que no tenga demasiada virtualidad, pues la renuncia de Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República, la elaboración de una nueva Constitución y finalmente el golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto, darán al traste con el reconocimiento del Jurado apenas dos años después.

Proclamada la República, se presentó a discusión un Proyecto de Constitución, en julio de 1873, que no vería la luz, pero que interesa por la concepción que tiene sobre la institución del Jurado. La considera de tal importancia que se ocupa de ella en el título preliminar, reconociéndola como derecho natural, al mismo nivel que el derecho a la vida, a la seguridad o a la dignidad. Dice el título preliminar: *“Toda persona encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad para mermarlos, todos los derechos naturales: (... )8º. El derecho a ser jurado y a ser juzgado por los jurados: el derecho a la defensa libérrima en juicio; el derecho, en caso de caer en culpa o delito, a la corrección y a la purificación por medio de la pena. Estos derechos son anteriores y superiores a toda*

---

<sup>60</sup> 1. Los mayores de 60 años.

2. ° Los que necesiten del trabajo manual diario para atender a su subsistencia.

3. ° Los Ministros de cualquier culto.

4. ° Los que hubiesen ejercido el cargo de Jurado.

*legislación positiva*". Su artículo 48, en esa línea de dar máxima relevancia al Jurado, lo sitúa al mismo nivel que los tribunales ordinarios, así dice: *"El Poder judicial será ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá jamás de los otros Poderes públicos"*. Por último, el título X en su apartado 4 dice que *"se establece el Jurado para toda clase de delitos. En cada Municipio habrá un Tribunal nombrado directamente por el pueblo y encargado de entender en la corrección de las faltas, juicios verbales y actos de conciliación"*.

El régimen republicano tuvo una vida exigua y el Proyecto de Constitución nunca vio la luz como texto fundamental, por lo que las disposiciones relativas al Jurado, que en algunos casos rayaban la utopía, desaparecieron con ellos.

Comenzaron a ganar cada vez más fuerza las voces que pedían una reforma del Jurado. Voces que provenían sobre todo del sector de los Jueces de Derecho. No solo algunos abogaban por esa reforma, sino que iban más allá pidiendo que se suspendiera. Teniendo en cuenta este clima hostil produciría un hecho que empeoraría aún más las perspectivas de vida del Jurado. Y es que el 3 de septiembre de 1874 se forma un nuevo Gobierno de la mano de Práxedes Mateo Sagasta, que nombrará a Eduardo Alonso Colmenares como ministro de Gracia y Justicia sustituyendo así a Montero Ríos. El mismo Montero Ríos, que propició la rápida publicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el juicio oral ante el Jurado. Esto no había gustado a Colmenares, ya que él entendía que para que existiera un Jurado funcional era necesaria previamente una plena división judicial.

Cuando asume Colmenares la cartera, toma nota de todas estas críticas formuladas por los Jueces de Derecho, quienes señalan como causa principal de la disfuncionalidad del Jurado precisamente esa falta de una previa división judicial. El ministro, pues, se planteó realizar una nueva Ley de Enjuiciamiento, pero mientras tanto preparó un Decreto para suspender la aplicación del Jurado. Dicho Decreto no llegó a promulgarse debido al pronunciamiento el 29 de diciembre de ese mismo año de Martínez Campos y la vuelta de Alfonso de Borbón. El Ministerio pasó entonces a manos de Francisco de Cárdenas, que debió encontrarse a su llegada con el proyecto de Decreto que procedió rápidamente a promulgar, pero cambiando el preámbulo que justificaba el decreto como medida temporal hasta que se promulgara una nueva ley reformando el Jurado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El 3 de enero de 1875 se suspende la parte de la Ley de Enjuiciamiento relativa al Jurado y al juicio oral y público ante los tribunales de derecho. En su preámbulo se señalaban las graves disfunciones detectadas

durante los meses de vigencia de la Ley, haciendo hincapié en que se daban resoluciones benévolas sin que estuvieran totalmente justificadas.

Este decreto pone fin pues a esta etapa de funcionamiento del Jurado, provocando un total silencio sobre la institución en cuanto a los textos legales se refiere. La Comisión General de Codificación, será restablecida el 19 de junio de 1876 y revisará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir completamente los ya suspendidos preceptos relativos al Jurado. No se hablará más del Jurado ni en la Compilación de Enjuiciamiento Criminal de 1879 ni en la nueva ley procedimental de 1882.

Fruto de esa ideología ya latente en el ministerio de Regencia, la Constitución de 1876 no se refiere en ningún momento al Jurado (tal y como había hecho su predecesora del 45, también moderada y conservadora). Para ella la institución no existe. El título IX<sup>61</sup>, que se ocupa de la administración de justicia, recoge escuetamente lo relativo a los tribunales, pero sin que en ninguno de sus artículos haga referencia a la institución, tal y como hemos señalado<sup>62</sup>. Si bien, y aunque parezca una paradoja, es bajo esta Constitución cuando el Jurado encontrará por fin su formulación más adecuada, su reconocimiento amplio, y su mayor vigencia, gracias a la tan ansiada por algunos Ley de 1888.

Desde la suspensión del Jurado en 1875 hasta la reinstauración en 1888, se vive un clima de abundantes disputas entre los partidarios de la institución y los detractores de la misma. Pese a esta nueva supresión, sus partidarios continuaron luchando con vehemencia por su reinstauración, agrupados en los partidos progresistas y de corte liberal.

---

<sup>61</sup> “Art. 76. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer se ejecute lo juzgado.

Art. 78. Las leyes determinarán los Tribunales y Juzgados que ha de haber, la organización de cada uno, sus facultades, el modo de ejercerlas y las calidades que han de tener sus individuos”.

<sup>62</sup> Tampoco la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 hace referencia alguna al Jurado. En la exposición de motivos que presenta el Ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez, del R.D. de 14 de septiembre de 1882 aprobando el Proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal, se señalan los errores que se quieren corregir con él frente al vigente, como la excesiva duración del sumario y la indefensión del reo, y cómo la nueva Ley pretende sobre todo sustituir el procedimiento escrito, secreto e inquisitorial por un juicio oral y público, pero en ningún momento se hace referencia al Jurado.



## 5. RESTABLECIMIENTO POR LEY DE 20 DE ABRIL DE 1888

El 9 de enero de 1883 una crisis de gobierno ponía la cartera de Gracia y Justicia en manos de Vicente Romero Girón, en sustitución de Alonso Martínez. Romero, gran partidario del Jurado, como había demostrado en sus intervenciones parlamentarias, quien presentará un Proyecto de Ley para el establecimiento del Tribunal del Jurado en materia criminal tan solo un mes después de tomar posesión como ministro. Aunque finalmente la crisis en el gobierno, la sustitución de Romero en la cartera de Gracia y Justicia y otros acontecimientos políticos llevaron a que el Proyecto se quedase simplemente en eso.

A finales de 1886 es nombrado de nuevo Manuel Alonso Martínez como Ministro de Gracia y Justicia, hombre que se enfrentará una vez más a la cuestión del Jurado.

Y es que había ya demasiadas promesas y declaraciones sobre la reinstauración del Jurado: ya en 1883 el Ministro habló de que, cuando las condiciones fueran más favorables, se reinstauraría el Jurado en España; se había aprobado ese mismo año en el Senado el proyecto de Romero Gijón; la fórmula de reforma constitucional de 3 de junio de 1885 lo exigía; el Mensaje de la Corona de 10 de mayo de 1886 lo demandaba.<sup>63</sup>

Consecuencia del pacto de Reforma Constitucional, que propicia el reforzamiento del Partido Liberal y recupera en cierto modo planteamientos de 1869, será el anuncio que el 8 de mayo de 1886 realizará el presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, del propósito de presentar un Proyecto de Ley del Jurado. El propósito iba en firme, pues tan sólo dos días después,<sup>64</sup> y con ocasión del Mensaje de la Corona en el acto de apertura de las Cortes, se reiteró la intención de elaborarlo.

El Proyecto corrió a cargo de Manuel Alonso Martínez, que había recuperado la cartera de Gracia y Justicia el 27 de noviembre de 1885, y para su elaboración se tuvieron en cuenta la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, la opinión manifestada en diferentes informes tanto de las Audiencias como de las Universidades, Colegios de Abogados y otras instituciones. Así

---

<sup>63</sup> En estas palabras habló la regente María Cristina: “ *por eso mi Gobierno, en armonía con su significación, presentará una serie de proyectos encaminados a garantizar con la debida eficacia, en la extensión que le marcan sus compromisos, los derechos individuales consignados en la Constitución de la Monarquía; la función del sufragio electoral, la responsabilidad de las Autoridades gubernativas ante el Poder judicial y el juicio por Jurados, y otras reformas de la propia índole que considera convenientes al país...* ”.

Discurso de la Corona leído en la apertura de las Cortes.

Gaceta de Madrid núm. 131, de 11/05/1886, páginas 409 a 410. Párrafo 6º.

<sup>64</sup> Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 10 de mayo de 1886, P. 3.

como las Leyes que sobre la institución existían en otros países. Además, dejaron su impronta en la Ley, por una parte, el Proyecto que había elaborado y presentado el anterior ministro de Gracia y Justicia, Romero Girón; y por otra la actuación del mismo ministro, Alonso Martínez, en especial en cuanto al entronque del Proyecto con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que era la vigente y a la que tuvo que ajustarse en sus aspectos procesales.

Todo ello culminó finalmente en que se presentara ante el Congreso el 28 de noviembre de 1886 un proyecto de Ley del jurado que constaba de 129 artículos, una disposición especial y tres transitorias. En el preámbulo que lo acompañaba, su redactor manifestaba claramente su satisfacción por poder cumplir esta promesa hecha 5 años atrás al gobierno. Me gustaría ejemplificarlo con un párrafo de este preámbulo:

*“...De esta manera se ha interesado la opinión popular en las funciones de la administración de justicia, mientras llegaba el momento de interesarla activa y eficazmente, realizando la fusión de los elementos referidos con el de los Jueces de derecho por la organización y establecimiento del Tribunal del Jurado. A este fin conduce el actual proyecto. Para conseguirlo, para que la realidad no deje de corresponder á los fundamentos científicos y morales sobre que descansa la institución, forzoso ha sido estudiar los complejos elementos que la constituyen, su índole peculiar, las condiciones del medio en que ha de vivir, los precedentes de las legislaciones extranjeras, los de la corta experiencia que de aquélla se hizo en virtud de la ley de 1872, publicada por otro ilustre Ministro de Gracia y Justicia, y todo cuanto tienda á asegurar las cualidades que deben concurrir esencialmente en los individuos llamados á juzgar á sus iguales, á saber: la independencia, la moralidad y la mayor ilustración posible, facilitada á su conciencia y entendimiento por medio de los debates del juicio...”<sup>65</sup>*

Por fin se considera que España está preparada para esta institución.

El 6 de diciembre se nombró la Comisión que habría de dictaminar sobre el Proyecto presentado. La Comisión estaba presidida por Antonio Maura y su secretario fue Juan Rosell. La Comisión presentó sus conclusiones en el Congreso el 10 de marzo de 1887, con leves modificaciones respecto del Proyecto presentado.<sup>66</sup> Teniendo como base dicho Proyecto y dichas conclusiones, el 21 de abril se iniciaron las discusiones en la sede de la Cámara Baja. A

---

<sup>65</sup> Gaceta de Madrid, 2 de diciembre de 1886.

<sup>66</sup> A destacar de forma ejemplificativa: se añadieron a las exclusiones la de los que tuviesen amistad íntima o enemistad manifiesta, y los que tuvieran algún tipo de interés directo o indirecto en la causa. Se prescinde de los delitos electorales. Además, por medio de otra disposición especial se reconoce el abono de dietas a los jurados que las reclamaran.

su vez, se produjeron fuertes discusiones entre los distintos periódicos de la época, especialmente entre El Liberal y los conservadores La Época y Las Ocurrencias. Dice J.A.ALEJANDRE que *“realmente la Cámara estaba dividida a priori entre los decididos a aprobar una nueva ley del Jurado y quienes se obstinaban en mantener la postura contraria. Dada la politización del tema, nadie iba a ser convencido por las razones de sus adversarios políticos y a cambiar el sentido de su voto. Pero había que hablar. Para la galería quizá. Para la prensa, desde luego, y a través de esta para la nación”*.

Son buenas muestras de esto que dice Juan Antonio Alejandre en su obra *“Análisis de una experiencia histórica: los Tribunales de Jurados”* los discursos de diputados como Lorenzo Domínguez, que opinaba con fiereza que había asuntos más importantes en el país que el Jurado<sup>67</sup>; continuaba el miembro de la comisión Rosell y Rubert defendiendo al Jurado a capa y espada<sup>68</sup>; volverá después el diputado Isasa y Valseca en contra, en un interesante discurso en el que argumentaba que el Jurado había sido reformado cada vez que había estado en vigor, lo que reflejaba que la institución no funcionaba correctamente<sup>69</sup>; mientras que su homónimo Diaz Moreu se pronunciaba a favor de la totalidad del proyecto defendiendo las bonanzas de los Jueces de Hecho frente a los de Derecho.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> *“Poner a discusión en estos momentos, Sres. Diputados cuando se encuentra el país bajo estas impresiones, un proyecto de ley para establecer una institución que es la impunidad de los delitos en aquellas mismas Naciones donde son acabados y perfectos todos los demás medios para reprimirlos, no puede ocurrir más que al Gobierno del Sr. Sagasta en una de sus más intempestivas inoportunidades.”*

Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 21 de abril de 1887, P. 1939.

<sup>68</sup> *“El tribunal del Jurado con una conciencia sana, y si se me permite la frase, fresca, sin prevención ninguna en contra del acusado, sin esa costumbre que tiene el juez de derecho de ver en todo acusado un criminal, con esa importancia que para 61 tiene esta misión, con el respeto con quo entra en el tribunal, con la atención con que asiste d todas las deliberaciones, con el conocimiento que tiene de la localidad donde se ha cometido el delito, con el conocimiento que tiene de las personas que intervienen en el juicio, bien como testigos, bien como acusados y pasta como acusadores, con todo este cumulo de circunstancias que es difícil que puedan reunirse en un tribunal de derecho, entiendo yo que tiene más aptitud para juzgar con completa imparcialidad y con completo conocimiento del hecho criminal.”*

Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 22 de abril de 1887, P. 1965

<sup>69</sup> *“Vosotros sabéis muy bien que la historia del Jurado se reduce a esto. Se plantea el Jurado, se propone y se necesita inmediatamente la reforma del Jurado, porque vosotros sabéis muy bien que esa no es una institución sólidamente establecida más que en aquellos países donde existe por la historia y por la tradición.”*

Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 23 de abril de 1887, P. 1979

<sup>70</sup> *“Hay que tener en cuenta que, si hay errores judiciales en los tribunales de derecho, esos errores se perpetúan, porque los tribunales son los mismos, o al menos se perpetúan mientras los tribunales estén constituidos por las mismas personas, al paso que los errores que se cometan por el Jurado son distintos, independientes unos de otros; por eso, el error que se comete por un Jurado, no vuelve a cometerlo el mismo, porque el segundo es distinto al primero.”*

Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 25 de abril de 1887, P. 2008

El 14 de mayo la Ley del Jurado fue aprobada en el Congreso con 217 votos a favor, 49 en contra y el liberal Espinosa representó la abstención. Posteriormente, la Ley se remitió al Senado, donde siguió el trámite parlamentario, con interesantes intervenciones a favor y en contra del Jurado que concluyeron con algunos cambios en la Ley presentada y su aprobación en el Senado con 122 votos a favor y 52 en contra. Era el 24 de marzo de 1888. Remitida de nuevo al Congreso, la Ley fue aprobada el día 27 por 190 votos a favor y 26 en contra. Buscando la pronta puesta en marcha de la Ley, la Reina firmó un Decreto, en nombre de su hijo Alfonso XIII, el 20 de abril, a fin de iniciar el proceso de la formación y funcionamiento de la institución del Jurado. Tal y como se recogía en el Decreto, el 1 de enero del año siguiente. La Ley entró en vigor y previó las primeras sesiones para el mes de marzo.

Con esta nueva ley de 20 de abril de 1888<sup>71</sup> había renacido el Jurado en España, estando en vigor 35 años. Manuel Alonso Martínez había cumplido su promesa. Hace falta mencionar que en estos años posteriores surgiría mucha literatura específica sobre el jurado, ya fuera para criticarlo o en forma de manuales de instrucción sobre cómo ser buen jurado destinados a los nuevos jueces legos.

La Ley comprendía 122 artículos, 3 disposiciones especiales y un artículo adicional, estructurados en 18 capítulos, lo que representa para algunos una extensión excesiva, que señalan como inconveniente o defecto de esta.

Establece la Ley en su artículo 1º que el Tribunal del Jurado se compondrá de doce Jurados con dos suplentes, y tres magistrados, y será competente en el conocimiento de los delitos que especifica el artículo 4 incluyéndose no sólo los consumados sino también los frustrados y tentativas, así como la proposición y conspiración si estuvieran penadas en el Código, a tenor de lo dispuesto el artículo 2º de la ley. Igualmente se extiende la competencia a cómplices y encubridores.

El artículo 9 nos dice quiénes podrán ser parte del Jurado. Serán aquellos varones que sean contribuyentes directos del Tesoro, mayores de 30 años de edad. Además, se ha de ser cabeza de familia, alfabetizado, estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos y ser vecino del término municipal. A su vez el artículo 10 establece quienes no reúnen la capacidad para poder ser miembro del Jurado.

---

<sup>71</sup> Ley estableciendo el juicio por jurados para determinados delitos. Gaceta de Madrid núm. 115, de 24/04/1888, páginas 261 a 267.

En lo que respecta a los delitos sobre los que el Jurado va a conocer, se encuentran listados en el artículo 4º. Se extiende la competencia del Jurado al conocimiento de todos los delitos que más conmueven el orden social, que producen mayor alarma o que especialmente afectan a los derechos individuales. Van a conocer pues de delitos graves contra el honor y la vida de los españoles, así como aquellos delitos cometidos por medio de la imprenta y delitos electorales.

Los requisitos para ser jurado son similares a los establecidos por la Ley de 1872, siendo igualmente obligatorio el ejercicio de esa función, recogiendo la Ley las excepciones, incompatibilidades, recusaciones, formación de listas, etc. Acoge asimismo el juramento que han de prestar los catorce miembros del Jurado<sup>72</sup>, cómo ha de discurrir el juicio, y cómo han de deliberar y fallar, estableciendo que *“la mayoría absoluta de votos formará veredicto”* (Artículo 85). Se regula a continuación el juicio de derecho y los recursos posibles. Según Real Decreto de la misma fecha<sup>73</sup>, la Junta que recogía el artículo 16 de la Ley habría de reunirse la primera quincena de junio, y el Jurado comenzaría a conocer de las causas de su competencia por delitos cometidos a partir del inicio del año siguiente.

En cuanto al veredicto, se formará este por mayoría absoluta y en caso de empate se entenderá votada la inculpabilidad.

Desde el principio, y como no podría ser de otra forma, las actuaciones del Jurado fueron observadas bajo un gran espíritu crítico. Existiendo un Jurado funcional y que dictaba ya sentencias, era el turno de sus detractores de luchar por abolirlo de nuevo en nuestro país. Pero al margen de los reticentes al mismo, aglomerados sobre todo entre los grupos más conservadores tanto en el Congreso como en la prensa, destacan los informes y memorias de los Fiscales de los Tribunales y de las Audiencias que nos han llegado de esa época, destacando a diferencia de los del resto por su imparcialidad y análisis objetivo de la institución.

La Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial fue publicada el 14 de octubre de 1882 y establece en su artículo 15 la obligación de que el Ministerio Público haga un balance anual de

---

<sup>72</sup> Art. 58. *“Puestos de pie los 14 jurados, el Presidente pronunciará las siguientes frases: ¿Juráis por Dios desempeñar bien y fielmente vuestro cargo, ‘examinando con rectitud los hechos en que se funda la acusación contra N.N. apreciando sin odio ni afecto las pruebas que se os dieren y resolviendo con imparcialidad si son o no responsables de los hechos que se les imputan’?”*

<sup>73</sup> Real decreto dictando disposiciones especiales para la aplicación de la ley estableciendo el juicio por jurados para determinados delitos.

Gaceta de Madrid núm. 115, de 24/04/1888, página 261.

la administración de Justicia. Me gustaría transcribir aquí los párrafos 2º y 4º de la ley como muestra de ello:

*“El Fiscal del Tribunal Supremo á su vez tomará los acuerdos que conceptúe procedentes; y en exposición razonada dirigida al Gobierno de S. M. manifestará al comenzar cada año judicial el estado de la administración de justicia en España, las instrucciones más importantes que haya dado á sus subordinados y las reformas que en su concepto conviniese hacer para el mejor servicio.*

*Durante el año judicial podrán los Fiscales de las Audiencias territoriales pedir también á los de las Audiencias de lo criminal los datos y noticias que estimen pertinentes y adoptarán las medidas que sean conducentes para mantener la unidad de la jurisprudencia, dando conocimiento de todo al Fiscal del Tribunal Supremo.”*

Ello hay que ligarlo con el Decreto de 24 de septiembre de 1889<sup>74</sup> que en su artículo 1º dice que *“Los Presidentes y Fiscales de las Audiencias territoriales y de lo criminal elevarán al Ministerio de Gracia y Justicia, dentro del mes de enero de cada año, una Memoria razonada acerca de la manera cómo funcionó el tribunal del Jurado en el territorio de su jurisdicción durante el año anterior.”*

Estas memorias van a constituir una creciente llamada de atención sobre los defectos de la ley que habría de corregir. La mayor parte de estos informes que se conocen ponen de manifiesto múltiples deficiencias y dificultades en el funcionamiento del sistema establecido por dicha Ley. En el que se elabora por la Fiscalía del Tribunal Supremo ese mismo año de 1889 ya se aboga por una reforma de la norma. Los informes de los años siguientes no son mejores. Paulatinamente se ponen de relieve los defectos y, sobre todo, los problemas causados porque, contrariamente a lo que creían sus más convencidos defensores, el formar parte del Jurado se ve como una pesada carga, de manera que en muchas ocasiones son los más indefensos y los menos preparados, los que componen los Jurados, y ello porque no pueden o no saben cómo librarse. Poniendo como ejemplo una cita de la memoria del fiscal Salvador Viada de 1889: *“es doloroso que los más intrincados problemas de hecho que entrañan un proceso tal vez gravísimo se entreguen a un Jurado compuesto por gente ignorante e inculta, que ni siquiera comprende*

---

<sup>74</sup> Real decreto dictando disposiciones para practicar anualmente una información sobre la manera de funcionar el Jurado y determinar sus resultados.

Gaceta de Madrid núm. 274, de 01/10/1889, página 1.

*el lenguaje que en el juicio se habla y cuyo entendimiento se embarulla y confunde con las pruebas que se practican y con los recursos que se emplean.*”<sup>75</sup>

Quizá la situación viene expresada con gran crudeza en la memoria de 1895, en la que el Fiscal General Luciano Puga y Blanco dice que la misión de Jurado no se considera que ennoblezca y honre, sino que es rechazada abiertamente por los que tienen que ejercerla, y, de hecho, es ejercida por los más ignorantes, miserables y desvalidos.<sup>76</sup> Los informes de los años siguientes recogen testimonios similares y se insiste en la necesidad de una profunda reforma. Parece ser que la mayoría de las críticas son esbozadas precisamente hacia aquellos ciudadanos elegidos para formar parte del Jurado más que otro tipo de defectos procedimentales o contra el Jurado per se.

No hay que perder de vista aun así que los informes elaborados por los fiscales no escondían tras de sí un odio hacia la institución, sino todo lo contrario. En resumen, podemos decir que, sin dejar de creer en la bondad de la institución, exponían su convencimiento de que, tal y como estaba concebida y regulada, no podía continuar funcionando, era necesario reformarla (que no suspenderla).

Todo lo dicho anteriormente no deja de invitar a la reflexión acerca del porqué de tanta crítica a la Institución. ¿Habría cambiado algo una reforma? Los artículos podrían haber sido modificados, las lagunas llenadas, los problemas procesales solventados. Pero más allá de todo ello, todo parece apuntar a que la raíz era mucho más profunda de lo esperado. Que la solución a los problemas del Jurado habría de ser hallada en la propia sociedad de la época que según las memorias de estos fiscales indicaban no estar preparada para el desenvolvimiento en tan noble labor.

## **6. LAS SUSPENSIONES DEL JURADO**

### **I. SUSPENSIÓN PARCIAL DEL JURADO: 1907 - 1920**

---

<sup>75</sup> Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1889.

<sup>76</sup> “*Quéjense todos los Fiscales de que de día en día se nota más aversión en los ciudadanos a ejercer la función de Jurado; que todos hacen esfuerzos para no serlo; que a ese fin practican trabajos y utilizan recomendaciones, y que da ese modo quedan para formar Jurado los más desvalidos, los de menos instrucción, y los más asequibles a influencias e imposiciones.*”

Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1895.

No se produjo la tan solicitada reforma, pero los acontecimientos políticos que se desarrollaron en España llevarían poco a poco a la extinción de la institución. Sendos reales Decretos de 4 de febrero de 1907<sup>77</sup> y de 7 de agosto de 1920<sup>78</sup> suspendieron el tribunal del Jurado para ciertos delitos y en ciertos lugares, Barcelona y Gerona. Esto fue debido al gran aumento de la violencia terrorista en estas provincias, y puestos los autores en manos del Jurado, este siempre los absolvía tanto de estos crímenes sobre los delitos de sangre debido a las coacciones y amenazas que habrían de sufrir. De nada hubiera servido cambiar el texto legal dado que, y tal y como dice J.A ALEXANDRE: *“su fiel cumplimiento (de la ley) exigía una heroicidad que los llamados a ser jurados no estaban dispuestos a demostrar”*.

Concretamente, el Decreto de 1907 va a acordar la suspensión del juicio por jurados; limitándola a las provincias de Barcelona y de Gerona y a los delitos comprendidos en los artículos 1.º al 8.º, ambos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894, conocida como la Ley de Explosivos. A su vez el Decreto de 1920 va a ir más allá que el anterior decretando la suspensión del Jurado en la provincia de Barcelona para también los delitos de terrorismo recogidos en los artículos 418 y 19 del Código Penal de la época.

Estos decretos de 1907 y 1920 habían tenido valor de precedente en todo el territorio nacional. Y es que esta suspensión del Jurado en una sola provincia y para un solo tipo de delitos provocó una ola de críticas por todo el país. La protesta había sido insospechada, sobre todo de manos de los sectores socialistas, por medio de comunicados de protesta como el de la Unión General de Trabajadores como de diversos periódicos como El Socialista, El Diario de Barcelona o El Foro Español.

## **II. SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: 1923**

---

<sup>77</sup> Real decreto suspendiendo el juicio por jurados en los territorios de las provincias de Barcelona y Gerona, limitándose la suspensión a los delitos comprendidos en los artículos del 1.º al 8.º ambos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894.

Gaceta de Madrid núm. 36, de 05/02/1907, página 465.

<sup>78</sup> Real decreto suspendiendo el juicio por Jurados en el territorio de la provincia de Barcelona, en cuanto a los delitos comprendidos en los artículos 1º al 8º, ambos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894 y 418 y 419 del Código penal.

Gaceta de Madrid núm. 223, de 10/08/1920, página 544.



Pero el fin del Jurado vino como consecuencia de la sublevación y el golpe de Estado subsiguiente del Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. La situación era complicada tanto a nivel político como social, económico, militar... Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, había prevenido al Rey de que no era aconsejable entrar en una espiral represiva o en un sistema autoritario, y mucho menos pensar en un golpe de estado. El día siguiente al pronunciamiento militar, el 14 de septiembre, el gobierno legítimo había pedido al Rey la destitución inmediata de los generales sublevados, tanto de José Sanjurjo como de Miguel Primo de Rivera, y la convocatoria de las Cortes, pero el monarca hizo caso omiso de los consejos, apoyó abiertamente el golpe y nombró presidente a Primo de Rivera. Se sustituyó el Gobierno por un Directorio Militar, integrado por nueve generales y un almirante, se suspendió la Constitución, se disolvieron los Ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos y se declaró el estado de excepción. ¿Había llegado también la hora al Jurado?

Efectivamente. Una semana más tarde, el día 21, se aprobaba un Real Decreto<sup>79</sup> cuyo artículo único decía *“se suspende el juicio por jurados en todas las provincias del reino”*. En la previa exposición de motivos se pretendía justificar esa suspensión usando duras fórmulas como que *“Es notorio que el Jurado ni ha fortalecido, ni ha simplificado, ni ha acreditado, ni ha dado independencia a la Administración de justicia, siendo frecuente el caso de exteriorizarse con escándalo público la coacción que se ejercía sobre estos Tribunales ante las mismas puertas donde habían de ejercer su misión y no raro el de que ciudadanos negligentes deleguen funciones que debían ser sagradas en otros que, de ejercerlas sin la debida dignidad, han constituido modo de vivir”*.

La prensa del día siguiente poco comentario hizo, la disposición que se refería al Jurado aparecía camuflada entre otros tantos decretos. Sólo El Socialista le dedicaba un artículo entero en su portada de manos de Manuel Cordero titulado *“Ayer quedó suspendido el Jurado: La Libertad Triunfará.”*<sup>80</sup> Que directamente identifica plenamente a la libertad con el Jurado, en una gran oda catastrofista.

El Jurado, fruto de las ideas liberales y democráticas, sucumbía como aquellas, bajo el sable de la represión, el autoritarismo y la dictadura. En esta fecha, no se produce la supresión del Jurado,

---

<sup>79</sup> Real decreto suspendiendo el juicio por Jurados en todas las provincias del Reino. Gaceta de Madrid núm. 265, de 22/09/1923, página 1178.

<sup>80</sup> El Socialista, de 22 de septiembre de 1923.

sino su suspensión, dejando una puerta abierta a su retorno en caso de quedar el Decreto sin efecto. Por esto, nadie lo consideraba totalmente extinguido. Sus detractores continuarán luchando por su total supresión, así como sus seguidores buscarán abrir la puerta a que el Jurado volviera a funcionar de nuevo.

Pese a todo ello, hay que adelantar que por esta época el Jurado no gozaba de tantas simpatías como antaño. En el terreno puramente político, aquellos partidos que abogan por su vuelta lo que persiguen no es su mero restablecimiento, sino un Jurado con más competencias e incluso que superase la distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, entendiendo de ambos. Todo ello en el marco de los programas políticos de los partidos de tendencia revolucionaria o de izquierda. Sendos ejemplos serían el Manifiesto del Partido republicano radical socialista de diciembre de 1929 que buscaba la reinstauración del Jurado no solo para asuntos penales sino para también civiles. También figuraba el Jurado en la Declaración de principios del Estat Catalá del 13 de marzo de 1931 que proponía un Jurado que no solo tuviera facultad para declarar la culpabilidad, sino también para fijar la pena determinada.

En este clima, también en 1931 el Ministro de Gracia y Justicia García Prieto, presento al rey para su sanción un Decreto por el que se restablecía el funcionamiento del Jurado. Dicho Decreto fue sancionado el día 11 de abril de 1931.<sup>81</sup> La justificación que se da en la exposición de motivos dice así: *“Es indiscutible que, restablecidas por el de 19 de marzo último las garantías a que se refiere el artículo 17 de la Constitución del Estado, queda también restablecida la función del Tribunal popular, conforme a lo dispuesto en el párrafo quinto de la indicada disposición legal.”*

Disponía además que *“las causas seguidas por delitos de la competencia de tan repetido Tribunal que estuvieran pendientes de señalamiento para la vista, en la indicada fecha del restablecimiento de garantías, deben ser falladas con la intervención de los Jurados.”*

La inmediata proclamación de la República el 14 de abril echó al traste con la continuación de la ley de 1888, ya que el nuevo Gobierno, por supuesto a favor del Jurado, buscaría crear una nueva ley que introdujera novedades e intentar paliar con ellas los errores cometidos en el pasado.

---

<sup>81</sup> Real decreto restableciendo el funcionamiento del juicio por Jurados, suspendido por Real decreto de 21 de septiembre de 1923.

Gaceta de Madrid núm. 102, de 12/04/1931, páginas 162 a 163.

## 7. RESTABLECIMIENTO EN LA II REPÚBLICA

### I. LA CONSTITUCIÓN DE 1931: EL RENACER DE LA INSTITUCIÓN.

La República, pues, haciendo abstracción de los inconvenientes ciertos que la institución ofrecía y que se acentuarían con su puesta en vigor sin una previa reforma de la legislación penal y procesal, dispuso su restablecimiento mediante un Decreto, firmado por el presidente del Gobierno Provisional Nieto Alcalá-Zamora el 27 de abril de 1931.<sup>82</sup>

Este Decreto no va a ser una mera anulación de aquel que suspendió el Jurado en 1923 dejando a la institución tal y como estaba configurada en ese año, sino que, no sólo se va a respetar la ley de 1888 y sus posteriores modificaciones además se van a incluir importantes reformas con el objetivo de corregir los abusos cometidos en la práctica del Jurado ya expuestos en las Memorias de las Fiscalías, sin haber sido atendidos hasta entonces. Hay que recordar que la República después de la Dictadura lo que busca inmediatamente es el restablecimiento de todas aquellas figuras consideradas democráticas, siendo el Jurado una de ellas. Podemos ver esto en su exposición de motivos que comenzaba diciendo: *“Una de las primeras medidas que el Gobierno de la República pensó siempre dictar en razón de la sinceridad y firmeza de sus convicciones democráticas, es el restablecimiento del Jurado, suprimido con disfraces de suspensión por la Dictadura. (...) Tal criterio y la plenitud de poderes inherente al régimen de Gobierno, le lleva a restablecer el Jurado con reformas que, corrigiendo abusos observados en la práctica, denunciados por la opinión y señalados siempre en las Memorias de Fiscalía, no encontraron jamás el adecuado remedio”*.

Dichas reformas de la Ley de 1888 van a recaer, tal y como se establece en la exposición de motivos del Decreto en los siguientes puntos:

- a) Son eliminados de la competencia del Jurado los delitos de falsificación (*“la supresión afecta a las falsificaciones por que, con repetición, suele mostrarse el Jurado poco sensible a la gravísima trascendencia que tales delitos tienen contra la facilidad de las transacciones comerciales, y en daño, casi siempre, de los más humildes, pobres y analfabetos...”*), falsedad ( debido a su *“carácter eminentemente técnico y jurídico de*

---

<sup>82</sup> Decreto declarando restablecida la institución del Jurado, conforme a su ley orgánica de 20 de abril de 1888, con las modificaciones que se establecen.

Gaceta de Madrid núm. 118, de 28/04/1931, páginas 360 a 362

*los elementos esenciales de este delito, que exigen la sutil percepción de los actos intencionales y formales que en linderos con la falsedad meramente civil o la inexactitud sin gravedad jurídica, delimitan esta figura penal de apariencias claras y de realidad muy compleja...”) y duelo (“...operándose en la sociedad española, como en toda la civilización actual, una visible y rápida transformación encaminada a suprimirlo de las prácticas sociales, podría, si no frustrar ese progreso, retardarlo la confianza alentadora de veredictos absolutorios, todavía influidos por la supervivencia de antiguos prejuicios.”).*

- b) Reducción del número de jurados de doce a ocho como se ha ido haciendo en multitud de estados modernos. Ello con el fin de *“disminuir la resistencia de colaboración ciudadana y facilitar la más decorosa indemnización, propósito éste que. inspira otras de las varias modificaciones que se establecen”*.
- c) Se dispone que *“los Jurados recibirán, en el acto mismo de terminar el juicio, la indemnización por gastos de viaje y por día de asistencia, que se fijará oportunamente.”*  
Ya estaban reconocidas en la ley anterior, pero en la práctica se producía un gran retraso en su percepción, aumentando así la resistencia al Jurado.
- d) Se aumenta la cuantía de las multas por inasistencia a los juicios sin justificación.
- e) En los casos de indicio de soborno, *“se procederá por cohecho contra corruptores y corrompidos, y con el testimonio, en su caso, de la sentencia condenatoria por tal delito, interpondrá el Ministerio fiscal recurso de revisión contra la pronunciada, en virtud de tal medio abusivo”*.
- f) Se va a preguntar en lo sucesivo a los jurados sobre la participación de los acusados en la ejecución de los hechos y no sobre la culpabilidad. *“Pronunciada la sentencia por el Tribunal de Derecho, se someterá a los Jurados, en votación inmediata y secreta, (...) si juzga o no excesiva la pena impuesta Contestada afirmativamente la pregunta, quedará instruido el expediente de indulto”*.
- g) En lo que respecta a la recusación sin causa en el momento del sorteo, se va a limitar a que *“sólo podrá abarcar dos nombres de Jurado por cada una de las partes acusatorias o defensa”*. Así evitamos un Jurado fácilmente influenciable y acomodado.
- h) *“Queda suprimido el resumen de conclusiones y prueba a cargo del Presidente de la Sección de Derecho”*. Con el fin de que no influya en la decisión de los jurados.

- i) Por último, una muy importante novedad: la inclusión de la mujer como parte del Jurado ante determinados delitos. El texto dice que *“en los delitos de parricidio, asesinato, homicidio o lesiones, de competencia del Jurado, en que el móvil pasional fuera el amor, los celos, la fidelidad o cualquier otro aspecto de las relaciones sexuales y en que agresores o víctimas fueren de distinto sexo, el Jurado se compondrá por ms tacarle hombres y de mujeres.”*

La pregunta que debemos hacernos ahora es si bastaran estas reformas para que la institución quede saneada de los vicios que la adolecían. El fiscal general de la República, José Franchy, no se mostraba muy esperanzado al tenor de lo que escribió en la Memoria Fiscal relativa a ese año. Si bien sus comentarios sobre las reformas efectuadas eran positivos, defendía que todavía *“hay que purificarla aun de los vicios desarrollados al influjo de un ambiente social, que ha permitido la burla de las leyes y ha malogrado los intentos de ejercicio de la ciudadanía.”* Culpaba principalmente al caciquismo, las influencias, la falta de preparación de los jurados y a los jurados campesinos que se defendían mutuamente contra las clases dirigentes como los principales autores de las insuficiencias del Jurado. Me gustaría citar lo que él dice al final de la Memoria: *“En el periodo de renovación ahora iniciado con el cambio de régimen político del Estado, ha de atenderse decididamente, tanto como a la formación de las nuevas normas legales, al mejoramiento de las costumbres públicas. Es preciso acabar con la insinceridad en el cumplimiento de las leyes mediante una acción enérgica, tenaz y vigilante que despierte y fortalezca el espíritu de ciudadanía en que han de asentarse en definitiva las instituciones democráticas.”*<sup>83</sup>

Posteriormente se va a dictar un nuevo Decreto de 18 de junio<sup>84</sup> que establecía quiénes podían ser jurados, el régimen de incapacidades e incompatibilidades, así como los trámites de la formación de las listas. A destacar aquí los requisitos para que una mujer sea Jurado, que son enumerados en su artículo 3º: ser mayor de 30 años, alfabetizada, cabeza de familia o mujer casada y en caso de no serlo poseer un título académico o ejercer cargo retribuido de al menos 3000 pesetas. Nótese que son los mismos requisitos que para los hombres.

---

<sup>83</sup> Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1931.

<sup>84</sup> Decreto autorizando a la Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística para que proceda a la formación de las listas de Jurados.

Gaceta de Madrid núm. 170, de 19/06/1931, páginas 1488 a 1489.

Poco después el 22 de septiembre del mismo año se publica un nuevo Decreto<sup>85</sup>. Este nuevo Decreto se justifica en la necesidad de que la institución se halle *“rodeada de las mayores garantías de independencia, de imparcialidad y de acierto, para obtener el máximo de eficacia en la actuación de esta Institución venerable, que es consubstancial con toda organización democrática del Estado y que no podía faltar, por lo tanto, en la República española.”*

A destacar de este nuevo Decreto que se añaden a las exclusiones anteriores de la competencia del Jurado los delitos de robo y violencia sobre las cosas, así como el de imprudencia punible. Se impone como garantía de la imparcialidad y la libertad de acción del Jurado la llamada *“unidad de acto”* que a tenor del artículo 100 significa que una vez *“abierto el juicio por Jurados, desde el momento en que el Presidente declare constituido el Tribunal conforme a lo preceptuado en el artículo 58 de esta Ley, se celebrará por todos sus trámites con unidad de acto hasta el pronunciamiento de la sentencia y votación prevenida en el precedente artículo 99, practicándose todas las actuaciones en una sola sesión continuada por todo el tiempo que sea necesario al efecto.”*

Ante este marco de Decretos se esperaba que, constituidas ya las nuevas Cortes, se pudiera presentar un proyecto de una nueva ley sobre Jurados después de las modificaciones hechas a la ley de 1888. Concretamente se presentó el 24 de septiembre, emitiendo la Comisión permanente de Justicia su dictamen el 27 de octubre. En la discusión que lo procedió, se presentaron varias enmiendas, entre las que destaca la de la diputada Clara CAMPOAMOR pidiendo que el artículo 10 quede redactado incluyendo siempre a las mujeres: *“El Jurado se compondrá en todo caso por mitad de hombres y mujeres, procediéndose a sorteos distintos para cada grupo.”*<sup>86</sup>

Pero no va a tener lugar la defensa de esta enmienda ni otras tantas debido a que el 1 de diciembre del mismo año el ministro Fernando de los Ríos va a presentar un nuevo proyecto más completo. Empezaba a hablar el ministro así sobre el Jurado: *“La eminente función jurisdiccional de la soberanía popular que ejerce el Tribunal del Jurado necesita hallarse rodeada de las mayores garantías de independencia, de imparcialidad y acierto para obtener*

---

<sup>85</sup> Decreto disponiendo que los artículos que se mencionan de la ley del Jurado, promulgada en 20 de abril de 1888, queden redactados en la forma que se indica.  
Gaceta de Madrid núm. 267, de 24/09/1931, páginas 1970 a 1977.

<sup>86</sup> Diario Sesiones Cortes de 11 de noviembre de 1931. Apéndice 10 al diario núm. 72.

*el máximo de eficacia en la actuación de esta Institución venerable, que es consubstancial con toda organización democrática del Estado, y que no podía faltar, por lo tanto, en la República española.*”<sup>87</sup>

Introdujo la Comisión de Justicia, como no podía ser de otra forma, ligeras modificaciones el 29 de enero de 1932<sup>88</sup>. Pero, de nuevo, tampoco este proyecto llegaría a ser discutido y a convertirse posteriormente en ley, ya que el Consejo de Ministros pide mediante una comunicación que se le devuelva el proyecto ya que apreciaba que todavía debía examinar de nuevo el texto. Al final el asunto se quedó congelado y no se volvió discutir el proyecto de la nueva ley del Jurado.

El 1 de febrero de 1933 se presenta de manos del entonces Ministro de Justicia Álvaro de Albornoz un nuevo proyecto de ley del Jurado. Lo que busca este nuevo proyecto no es otra cosa que reducir el número de delitos que puede conocer el Jurado. El preámbulo del proyecto establecía las razones para ello, principalmente se buscaba evitar el mal visto anteriormente de que los jueces del pueblo “*no están obligados a la heroicidad*”. Deben ser sustituidos para estos delitos por jueces de carrera, que no puedan caer bajo coacciones y amenazas de los acusados.<sup>89</sup>

Esto fue aprobado el 27 de julio.<sup>90</sup> Se excluyen los delitos siguientes: “*a) Delitos contra las Cortes y sus individuos y contra el Consejo de Ministros. b) Delitos contra la forma de Gobierno, c) Delitos de rebelión y sedición. d) Asesinato, homicidio, lesiones e incendio cometidos con móviles terroristas. e) Robos cometidos con violencia o intimidación en las personas.*” También quedan excluidos los delitos “*definidos y penados en la llamada ley de Explosivos de 19 de Julio de 1894.*” Al final tampoco se hizo una nueva ley del Jurado, sino una reforma de la vigente.

El 1 de octubre de 1934 presentó el presidente del Consejo de Ministros R. SAMPER<sup>91</sup> un nuevo proyecto de ley, que de nuevo cayó en el olvido. La finalidad del proyecto era pasar de

---

<sup>87</sup> Diario Sesiones Cortes de 1 de diciembre de 1931. Apéndice 3 al diario num 83.

<sup>88</sup> Diario Sesiones Cortes de 29 de enero de 1932. Apéndice 7 al diario num 108.

<sup>89</sup> Diario de Sesiones Cortes Constituyentes de 5 de mayo de 1933. Apéndice único al diario num 333.

<sup>90</sup> Ley excluyendo del número primero del artículo 4.º de la vigente ley del Jurado, los delitos que se indican. Gaceta de Madrid núm. 218, de 06/08/1933, página 890.

<sup>91</sup> Ricardo Ibañez Samper, Valencia 1881 – 1938. Abogado y político republicano, diputado por Valencia en 1931 y 1933. Fue presidente del Gobierno desde el 28 de abril hasta el 4 de octubre de 1934.

tres jueces de Derecho a uno ya que *“La intervención de tres jueces de Derecho en el Tribunal del Jurado constituye un lujo de tecnicismo contradictorio con el principio de economía procesal.”*<sup>92</sup>

Paralelamente a todos estos proyectos, no hay que olvidar la obligada mención a la Constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931 y que en su artículo 103 disponía que *“El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.”* Hasta que esa nueva ley especia llegará, el Jurado irá funcionando en la práctica con la ley de 1888 reformada por los Decretos antes vistos.

En este marco funciono el Jurado posteriormente desde 1934 a 1936. Durante este periodo recibió pocos elogios por parte de la opinión pública, pero hay que decir a su favor que también pocas fueron sus críticas. Y es que, por primera vez desde su nacimiento en la España decimonónica, estuvo el Jurado vigente sin ser tan duramente criticado por parte de los periódicos de la época, jueces y magistrados, autores e intelectuales ni la ciudadanía en general. El análisis que de esta actitud puede hacerse es que por fin comenzó a arraigar la tradición de la institución en la sociedad española, por lo que su polémica llegó a un punto mínimo.

## **II. GUERRA CIVIL: LA DESNATURALIZACIÓN DEL JURADO**

Sin embargo, tiempos más oscuros se avecinaban sobre nuestra institución. Y es que lejos de alejarse del caciquismo, los intereses, las presiones, el Jurado cayó en una barrena politizadora que daba al traste con su imparcialidad. Ello debido a que el Jurado comenzó a transformarse en un instrumento de represión política en el marco de una delicada situación interna de la República que se avivó aún más con el estallido del Alzamiento Nacional.

Un Decreto de 23 de agosto de 1936<sup>93</sup> va a crear este tipo de tribunal especial formado por *“tres funcionarios judiciales que juzgarán como Jueces de Derecho, y catorce Jurados que decidirán sobre los hechos de la causa”*, y que juzgarán sobre delitos de *“rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, previstos y penados en las*

---

<sup>92</sup> Diario Sesiones Cortes de 1 de octubre de 1934. Apéndice 24 al diario num 113.

<sup>93</sup> Decreto creando con plena jurisdicción para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, un Tribunal especial compuesto por tres funcionarios judiciales que juzgarán como Jueces de Derecho y 14 Jurados que decidirán sobre los hechos de la causa.

Gaceta de Madrid núm. 237, de 24/08/1936, página 1451.



*Leyes*”<sup>94</sup>. Además, “los Jueces populares serán designados por los partidos que integran el Frente Popular y organizaciones sindicales afectas al mismo”<sup>95</sup> yendo con ello en contra de la propia naturaleza del Jurado, desnaturalizándolo.

Dos días más tarde nace un nuevo Decreto que complementa al anterior. En la exposición de motivos del mismo se defiende su justificación basada en que también actúan así otras democracias europeas y americanas y que es necesario en este momento que los españoles defiendan a su República.<sup>96</sup> Se crean Tribunales especiales en cada provincia, cuyos miembros del Jurado serán designados por los Comités provinciales de los partidos que formaran el Frente Popular y las organizaciones sindicales obreras correspondientes.

Precisamente esta imparcialidad es lo que dio argumentos al bando nacional para suspender el Jurado en su territorio mediante un Decreto de 8 de septiembre de 1936 por la Junta de Defensa Nacional Española<sup>97</sup>, y en concreto de su presidente M.CABANELLAS<sup>98</sup>, quien en la exposición de motivos habló muy duramente de la institución diciendo que el “*Frente Popular, que, por todos los medios ilícitos, hizo presa en muchos de sus componentes al objeto de sustituir la recta administración de Justicia por una notoria parcialidad en los asuntos atribuidos a su competencia, beneficosa a sus bastardos intereses*” y que debido a ello era necesario suspender el juicio por jurados en su totalidad “*para que los Tribunales de Derecho restablezcan el imperio de la Justicia misma, única e imparcial, columna básica en que ha de sustentarse toda sociedad organizada*”.

Esto en la zona del bando nacional, en la zona republicana no solo el Jurado va a seguir funcionando, sino que va a ir evolucionando por medio de nuevos decretos como el Decreto de

---

<sup>94</sup> Artículo 1 del Decreto

<sup>95</sup> Artículo 2 del Decreto

<sup>96</sup> “*El presente Decreto se dirige a conseguir tan fundamentales objetivos, tomando pie para ello de los principios consignados en las leyes de las grandes democracias europeas. Pero, además, respondiendo a un imperativo de los momentos actuales, desea el Gobierno, por considerarlo de necesidad imprescindible, dar entrada en los Tribunales de Justicia al pueblo que defiende la República vertiendo por ella su sangre generosa, a fin de que el aliento popular sea eficaz soporte de las resoluciones de los juristas y de que el pueblo, representado por sus órganos de opinión, sienta su propia responsabilidad al imponer a los culpables pública y motivadamente la sanción adecuada.*” Decreto de 25 de agosto, párrafo 2º de la exposición de motivos.

<sup>97</sup> Decreto de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional Española por el que se suspende el Tribunal del Jurado en todo el territorio nacional.

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional Española, Burgos, 12 de septiembre de 1936. Decreto 102.

<sup>98</sup> **Miguel Cabanellas Ferrer**, Cartagena 1872 – 1938. Fue un general del ejército español y uno de los cabecillas del golpe de Estado de 1936.

15 de septiembre de 1936<sup>99</sup> que va a ampliar el conocimiento de los delitos de estos tribunales especiales a incluir también los delitos militares. A este decreto le seguirán otro de 6 de octubre<sup>100</sup> que ampliara sus competencias a tenor de su artículo 1 a delitos de: *“rebelión, sedición, contra la seguridad exterior del Estado, traición y espionaje y para la de aquellas otras en que hayan podido incurrir los que hubieran participado en el movimiento rebelde y cuya participación pueda estimarse en virtud de indicios racionales”*. Esta suerte de fiebre de decretos alcanza su cúspide con el decreto de 10 de octubre<sup>101</sup> de mismo año por el que se crean los llamados Jurados de urgencia que entenderán de *“aquellos hechos (difusión de rumores falsos, dificultar el cumplimiento de órdenes de las autoridades, en materia de defensa, sanidad, abastecimiento...) que, siendo por su naturaleza de hostilidad o desafección al Régimen, no revistan caracteres de delito”*.

Entre este clima de pasiones y de odios no era pues posible que los jurados actuaran con la imparcialidad que su oficio demandaba. El condicionamiento político era inevitable e implacable. Su constitución fue claramente sectaria y estaba dominado por un enorme sentimiento de venganza. Si el acusado era contrario a la ideología republicana, sería juzgado por un Jurado compuesto por sus enemigos políticos, cuyo fallo era inapelable, y ante el cual cualquier delito común pasaba a ser un delito político.

El progresivo avance del Frente Nacional fue reduciendo el ámbito geográfico de aplicación del Jurado, cuyo final teórico se data el 1 de abril de 1939, aunque ya había dejado de funcionar un tiempo atrás. Por desgracia, el Jurado que fue recordado en la época venidera era este de la última etapa republicana, aquel que aplicaba la justicia del bando perdedor. Precedentes que desterrarían a la institución durante las décadas venideras.

---

<sup>99</sup> Decreto declarando que los Tribunales especiales creados por los Decretos que se indican tendrán también competencia para conocer de los delitos militares o comunes cometidos por militares o paisanos durante las operaciones de la actual campaña.

Gaceta de Madrid núm. 260, de 16/09/1936, página 1832.

<sup>100</sup> Decreto creando en Madrid, con plena jurisdicción, un Tribunal especial para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad del Estado, traición y espionaje, y para la de aquellas otras en que hayan podido incurrir los que hubieran participado en el movimiento rebelde y cuya participación pueda estimarse en virtud de indicios racionales.

Gaceta de Madrid núm. 281, de 07/10/1936, páginas 215 a 216.

<sup>101</sup> Decreto disponiendo se constituyan en Madrid y en los lugares que el Ministro de este Departamento determine Jurados de urgencia para conocer de los hechos de hostilidad y desafección al Régimen que no sean constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el Código penal común y en las leyes penales especiales.

Gaceta de Madrid núm. 285, de 11/10/1936, páginas 289 a 290.

## 8. EL JURADO DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1978

### I. EL JURADO EN LA CONSTITUCIÓN: EL ARTÍCULO 125

El legislador constituyente consagra en el artículo 125 de la Constitución Española de 28 de diciembre de 1978 la vuelta a la vida del Jurado después de un letargo que duró desde el fin de la Guerra Civil. Este artículo dispone que *“los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”*

Este artículo fue duramente criticado, tanto por su constitucionalidad como por ser un cajón de sastre. Y es que el análisis del precepto, la forma en la que está redactado, nos lleva inevitablemente a pensar en aquellas promesas de instauración del Jurado que prometían las primeras constituciones del siglo XIX y que nunca llegaban y eran postergadas eternamente. Este artículo necesitaba ser obviamente desarrollado.

Sin embargo, si nos retrotraemos, podemos ver que el Jurado no fue una de las prioridades en las discusiones del nuevo texto constitucional. Basta echar un vistazo al Anteproyecto de Constitución de 5 de enero de 1978, en el que el Jurado no figura en el articulado del proyecto. Su artículo 115 se limitaba a formular, con gran ambigüedad que *“los ciudadanos participarán en la administración de justicia en los casos y formas que la ley establezca.”* Van a destacar dos enmiendas pidiendo que se vuelva a instaurar el Jurado. La del Grupo Socialista que pedirá que quede redactado diciendo *“En los procesos penales los ciudadanos participarán a través de jurados en la forma que se establezca por la ley; en todos los procesos la ley regulará la incorporación a los tribunales, en cuestiones de trascendencia general o relevancia pública, de titulados de las especialidades requeridas, con voz y voto en la formación de la sentencia.”* Y la del Grupo Mixto que pide que quede redactado *“1. Los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia por medio de la acción popular en los delitos públicos, así como en los asuntos y procedimientos que afecten a los intereses generales. 2. La ley regulará la institución del Jurado y la incorporación de ciudadanos a los tribunales cuando el interés social debatido lo requiera”*.

Sólo estimo la Ponencia la propuesta del Grupo Mixto que influyó en la redacción de ahora el nuevo artículo 117 en informe de la Ponencia de 17 de abril de 1978, que decía que *“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia en los casos y formas que la ley establezca”*.

Cuando pasa la propuesta al Senado, el senador de designación real Antonio Pedrol Ruis hace una interesante observación, y es que al igual que hizo la Constitución de 1931, el articulado no puede quedar así, es necesaria una referencia concreta al jurado. Propone pues un nuevo texto que dice *“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del Jurado para determinados casos de naturaleza penal, cuando así se establezca por ley y también en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”* Texto que pasará casi en su totalidad a ser el nuevo artículo 125 de nuestra constitución.

Se critica la incongruencia que existe entre este artículo 125 y el 117 de nuestra Carta Magna cuyo número 1. dispone que *“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.”* que no incluye aquí a los jueces de hecho, legos, ciudadanos que constituyen el Jurado popular.

Se produjo una interesante discusión sobre si con la *“institución del Jurado”* se refería el artículo únicamente al Jurado puro, anglosajón, o que abría las puertas a un Jurado Escabinado. Dijo GÓMEZ COLOMER<sup>102</sup> (con anterioridad a la vigente Ley del Jurado): *“se trata de optar entre el Jurado clásico, el puro, el Juez que valora los hechos y da su veredicto, o entre el Juez que dicta también la sentencia, participando en la discusión sobre los fundamentos jurídicos y la aplicación del Derecho, es decir, el Jurado mixto, Escabinato o Escabinado.”*

No se pondrá de acuerdo la doctrina hasta la aprobación de la futura ley del Jurado que será analizada más adelante.

## **II. EL JURADO EN LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE 1985**

Habla del Jurado la LOPJ en su artículo 19.2 que dice que *“2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia: mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos previstos en esta Ley.”*

---

<sup>102</sup> **Juan Luis Gómez Colomer.** *Comentarios a los artículos 19.2 y 83 de la LOPJ de 1985: Problemas prácticos aplicativos y de lege ferenda en el futuro juicio por jurados en el proceso penal.* La Ley, 1986, tomo 1, pg 1050.

Artículo que será criticado por PEREZ CRUZ<sup>103</sup> achacando un mal ejemplo de técnica legislativa. Dice que este artículo era innecesario porque *“el mandato constitucional de la participación popular en la Administración de Justicia no necesita de nueva plasmación legal, sino de su especificación.”*

También nos habla del Jurado su artículo 83<sup>104</sup>. De nuevo las críticas se advinieron. Principalmente se criticaba que la LOPJ no debería de desarrollar al Jurado, sino que era necesario aprobar una ley orgánica que regulara al Jurado. A continuación, voy a reproducir las principales críticas y defectos de cada apartado del articulado:

- (a) Artículo 83.1: aquí la doctrina no se pone de acuerdo sobre la posible incardinación de los Tribunales en el articulado. Si debe haber Jurado en la Audiencia Nacional o/y debe haberla en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
- (b) Artículo 83.2. Párrafo 1º: la discusión se centra en la palabra “obligatoria”. Si realmente era necesario incluirla debido a la historia de nuestro país y sus relaciones con la Institución, o si se presupone que ha de serlo.
- (c) Artículo 83.2. Párrafo 2º: genera interpretaciones sobre si el legislador se refiere al Jurado Puro o al Escabinado.
- (d) Artículo 83.2. Párrafos 3º y 4º no generaron mayor polémica.

Por último, su Disposición Adicional Primera se prometió que: *“en el plazo de un año, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de (...) y del jurado.”* Promesa que no

---

<sup>103</sup> **Agustín-J Pérez Cruz Martín.** La participación popular en la Administración de Justicia: El tribunal del Jurado. Madrid, 1992, pg 255.

<sup>104</sup> *“1. El juicio del Jurado se celebrará en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley.*

*2. La Ley del Jurado deberá regular su composición y competencias, teniendo en cuenta los siguientes principios:*

- a) La función de Jurado será obligatoria y deberá estar remunerada durante su desempeño. La ley regulará los supuestos de incompatibilidad, recusación y abstención.*
- b) La intervención del ciudadano en el Jurado deberá satisfacer plenamente su derecho a participar en la administración de Justicia reconocido en el artículo 125 de la Constitución.*
- c) La jurisdicción del Jurado vendrá determinada respecto a aquellos delitos que la ley establezca.*
- d) La competencia para el conocimiento de los asuntos penales sujetos a su jurisdicción se establecerá en función de la naturaleza de los delitos y la cuantía de las penas señaladas a los mismos.”*

cumplió ya que hubo que esperar 10 años más para tener nuestra Ley del Jurado vigente actualmente.

### III. LEY DEL JURADO DE 1995: EL JURADO MIXTO

La primera proposición de Ley Orgánica del Jurado fue la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco el 16 de septiembre de 1983. Fue retirada la proposición por el mismo grupo el 15 de junio de 1984 sin ni siquiera discutirse.

La segunda proposición de ley correrá a cargo del Grupo Parlamentario CDS que presentó su proyecto el 27 de febrero de 1990 ante el Senado. Fue rechazada por el pleno del Senado el 30 de marzo de mismo año.

El 20 de mayo de 1994<sup>105</sup> el Gobierno socialista presenta un proyecto de ley orgánica del Tribunal del Jurado. El 11 de mayo de 1995<sup>106</sup> va a tener lugar en el Senado el primer debate sin que dichas enmiendas se vayan al final a incluir debido a que la votación conjunta fue rechazada. Se incluyen las enmiendas que en su momento fueron formuladas por el Senado y el 22 de mayo de 1995 se aprueba la nueva ley siendo modificada por la ley orgánica 6/1995 de 16 de noviembre que añadió enmiendas anteriores que en su momento fueron formuladas por el Senado.

En la Exposición de motivos de la ley, solo se leen palabras de elogio a la institución, como la siguiente: *“Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos.”*

Antes de entrar a un análisis detallado de la Ley del Jurado, hay que señalar que tipo de Jurado nos vamos a encontrar. Y es que el Jurado que recoge esta ley, y que tenemos actualmente en

---

<sup>105</sup> Dictamen del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. BOCG serie A, número 64-1, de 20-5-94. Número de expediente 121/000050.

<sup>106</sup> Diario de Sesiones de Pleno y Diputación Permanente Congreso del Congreso, número 146 de fecha 11/05/1995. Cve: PL\_146

España es el llamado Jurado mixto parecido al que tienen países como Bélgica, Austria o Noruega. Este va a ser un tipo de Jurado que se encuentra el Jurado puro anglosajón y el Jurado escabinado utilizado en otros países latinos como Italia, Grecia, Portugal y Francia. Es un Jurado que parte del llamado Jurado puro, pero que va a distar de él en tanto que se va a adecuar la institución a los principios constitucionales que rigen el proceso penal, en especial el principio de motivación de las sentencias.

Queda perfectamente explicado en palabras de DE LA LLANA VICENTE, que nos dice que en España se ha optado por *“un sistema de Jurado mixto, en el que los miembros legos se pronuncian sobre la valoración fáctica del caso, así como las causas de exclusión de los diferentes elementos estructurales del delito, de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (...) y el pronunciamiento sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, en tanto que los jueces de derecho, le corresponde el pronunciamiento jurídico, es decir, la determinación e imposición de la pena o , en su caso, las medidas de seguridad, así como la responsabilidad civil del penado”*.<sup>107</sup> Extrayendo de aquí que lo más importante no es solo que los ciudadanos jurados han de expresar las pruebas en las que basan sus convicciones sino que han de motivar el razonamiento llevado a cabo para alcanzar el fallo determinado.

Dado que el objeto de este ensayo es la evolución histórica de la institución no el análisis de la ley vigente, bastaran unos sucintos comentarios sobre la ley actual.

En lo que respecta a los requisitos para ser Jurado, están recogidos en el artículo 8 de la ley. A saber: *“1. Ser español mayor de edad. 2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 3. Saber leer y escribir. 4. Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido. 5. No estar afectado por discapacidad física o psíquica que impida el desempeño de la función de jurado”*.

Comparándolo con el articulado de la última ley vigente, en tiempos de la II República, hay dos diferencias notables: reducción de la edad para ser Jurado de los 30 a los 18 años y no es necesario ser cabeza de familia, ni título académico ni un sueldo determinado.

En lo que respecta a su composición, hemos pasado de ocho jueces de hecho y de tres magistrados a nueve jueces de derecho y un magistrado.

---

<sup>107</sup> M. De la Llana Vicente. *La regulación normativa del veredicto*. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1877, 2000, p.6.

En lo que respecta a la votación del veredicto, en el pasado se exigía una mayoría absoluta. Con la nueva ley, se exige una mayoría cualificada fijada en siete votos para declarar la culpabilidad, o una mayoría cualificada de cinco votos para declarar la inocencia (artículos 58 a 60 de la ley).

Por último, en lo que respecta a los delitos de los que conoce el Jurado. A lo largo de la historia de la institución en nuestro país, ha sido común que el Jurado conociera de delitos que atentaran contra el orden público o la seguridad del Estado. Por ejemplo, en el Real decreto de 24 de septiembre de 1931, que hemos visto con anterioridad, en su artículo 4 nos dice que el jurado conocerá de los: *“Delitos de traición. Delitos contra las Cortes y sus individuos, y - contra el Consejo de Ministros. Delitos contra la forma de Gobierno. Delitos de los funcionarios públicos •contra el ejercicio de los derechos individuales garantizados por la Constitución. Delitos de rebelión. Delitos de sedición. Abusos. contra la honestidad cometidos por funcionarios públicos.”* En la etapa republicana el Jurado conocía de 25 delitos distintos. El número de delitos de los que conoce el Jurado en la actualidad es similar, pero no recoge ninguno de los tipos de delito antes mencionados, a excepción del delito de los funcionarios públicos.

Por otro lado, sí que siguen conociendo de algunos de los mismos delitos. A saber: el de los funcionarios antes mencionado; desviación de caudales públicos y cohecho; homicidio e infanticidio; lesiones y demás delitos contra las personas.

## 9. CONCLUSIONES

Del estudio realizado a lo largo de este ensayo sobre la institución del Jurado en España, desde el punto de vista del análisis histórico de su evolución jurídica, podemos sacar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, que España no estuvo mucho más rezagada que el resto de los países en lo que respecta a la génesis de la institución, con la salvedad de Reino Unido, lugar de nacimiento de este Jurado moderno desde donde pasaría al resto de naciones europeas y americanas. No hemos de perder de vista que, en nuestro país, el primer desarrollo legislativo fue ya en 1820 con la Ley de Imprenta. Si echamos un vistazo al resto de países vemos que en Estados Unidos la institución queda recogida en 1788 en su Constitución; en Francia funcionó por primera vez en 1791 de manos de la ley de septiembre de ese año sobre Policía de seguridad y la Justicia Criminal; en Italia se positiviza solo en 1859 de manos del su Código Procesal Penal y en



Alemania se establece en 1877 gracias a la ley de Organización Judicial de mismo año. No puede afirmarse otra cosa más que España fue a la par con las potencias europeas y los Estados Unidos en la instauración del Juicio por Jurados.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, las referencias al derecho comparado fueron constantes a lo largo de nuestra historia. Hemos visto todas las repetidas menciones que hacían tanto intelectuales, como diputados y juristas a la noble institución del Jurado usada en Reino Unido y Francia como símbolo de la libertad y de la democracia. Algo que sus detractores no dejaban de admitir, aunque fuera después para negar que España estuviera preparada para ella.

En tercer lugar, la idea del Jurado como símbolo. A lo largo de la historia de nuestro país, la institución ha sido vista por los sectores más liberales y progresistas como un símbolo de la democracia, de la libertad, de los derechos. Ha sido siempre la bandera que han enarbolado junto con el Estado Constitucional, la libertad de imprenta, el sufragio... las ideologías liberales y democráticas. Sus etapas de funcionamiento en nuestro país coinciden exactamente con las épocas de Gobierno de estas ideologías.

En cuarto lugar, el fin de la institución. El fin del Jurado no ha sido otro que poder acercar la Administración de Justicia al pueblo. Se intentó fraguar siempre como un derecho, pero también como un deber. Que aumentara la conciencia y el compromiso con el Estado, poder crear una población más responsable y vinculada con las principales instituciones del país.

En quinto lugar, la ingente cantidad de reformas, o de intentos de las mismas, que sufrió durante su vigencia. Y es que podemos concluir que dos motivos han sido los principales esgrimidos contra la institución: que la población no estaba preparada para entender del juicio y de las pruebas, alegando escasa formación, analfabetismo...y que el Jurado ha estado muy sujeto a coacciones, sobornos y demás.

En sexto lugar, ha experimentado una evolución en el tipo de delitos de los que conoce. Me ciño a lo expuesto en el apartado anterior. Lo único que deseo decir es que se ha producido una evolución que ha reducido la cantidad de delitos de los que conoce el Jurado dejando aquellos que poseen una menor complejidad. Considero que ha sido especialmente positivo la reducción de los delitos de índole económica.

En séptimo lugar, el Jurado ha funcionado y funciona. Parece algo de Perogrullo, pero a pesar de la febril crítica que ha sufrido la institución, ello no es óbice para negar que ha funcionado en España durante diversos periodos a lo largo de casi los dos últimos siglos y también en la

actualidad. A pesar de sus deficiencias, el Jurado ha actuado, ha emitido condenas y se han dictado sentencias que además se han cumplido.

En octavo lugar, y ligado a los tres párrafos anteriores, el Jurado en España ha mostrado deficiencias gravísimas. No solo por los problemas que pudiera plantear la falta de preparación y de interés ciudadano, sino por otra serie de circunstancias que no eran culpa suya. A saber, por ejemplo, la complejidad de los delitos de los que han tenido que conocer; la capacidad de recusación que tenía el imputado sobre los jueces elegidos y juicios en la que la cuantía económica del objeto del litigio era irrisoria.

En noveno lugar, sigue siendo un tema de actualidad. El 21 de junio de 2017 ha habido una fijación de criterios del Tribunal Supremo sobre competencia del Tribunal del Jurado tras la reforma del proceso penal en materia de conexión de delitos. La última reforma de nuestra ley del Jurado es de 14 de diciembre de 2017. Basta echar un vistazo a las noticias del país para ver titulares de juicios llevados a cabo por el Jurado, o columnas de opinión en los principales periódicos, bien para alabar a la institución, bien para criticarla.

Dicho todo esto y en lo que respecta a mi opinión personal sobre el tema que aquí nos ocupa. He de comenzar diciendo que no es este tema algo baladí, y que es difícil dar con la respuesta acertada. Mi opinión personal es a favor del Jurado. A favor, sí, pero a favor hoy, en este año 2018. Pero si se echa una mirada al desarrollo histórico y avatares de la institución, es más difícil poder mostrarse entusiasmado con su labor.

El Jurado ha demostrado tener los defectos que sus detractores le achacaban. No debería de haber conocido de algunos delitos, eso es algo claro. Ni tampoco deberían haberse llevado a cabo juicios cuyo valor pecuniario era ínfimo, como el del robo de una gallina, en el que valía más la dieta de uno de los magistrados que el objeto del litigio. Es entendible que en una sociedad rural como era la de la época, no se fuera a dictar culpabilidad en delitos como el de falsificación de moneda. Que muchos juicios tenían lugar en la provincia, en los pueblos precisamente, donde mucha gente se conocía entre sí, lo cual afectaba sin duda alguna al veredicto. Además de que menos aliciente aún tenían los españoles para ser jurados, porque las dietas no les llegaban nunca, y participando en esta institución perdían días de trabajo en el campo, labor que les daba de comer a ellos y a su familia. Entendible es para mí la desgana que tenían de ser miembros de la institución.

Por desgracia, tengo que estar de acuerdo con el argumento de aquellos que han afirmado constantemente que la sociedad española no ha estado suficientemente preparada, no ha estado

a la altura de sus cargos de jueces de hecho. Sujetos como estaban a coacciones y sobornos. A declarar contra los suyos o contra los del pueblo vecino. En el marco de una sociedad con una alta tasa de analfabetismo y con nula o muy escasa formación académica.

Por todo lo antes expuesto no puedo más que reafirmarme en que esta sociedad no estuvo preparada para la labor que se le encomendó.

Sin embargo, a día de hoy, soy más optimista, y considero que la sociedad española sí que está preparada para la institución. Una sociedad en la que todos estamos alfabetizados, con como mínimo una enseñanza secundaria obligatoria y una mejor formación. Vivimos en una época en la que existe un sistema de oposición para poder acceder a la Judicatura, en la que cualquiera puede llegar a un puesto de importancia en el ámbito de la Administración Pública.

Considero que el Jurado no sólo viene bien a la ciudadanía, sino también a la Administración. Hacemos partícipes a los ciudadanos en las decisiones de la Justicia, lo que sin duda favorece su conciencia de Estado, su conocimiento de las instituciones y le permite formar durante un tiempo parte del Poder Judicial. Lo cual sin duda alguna considero que crea una conciencia ciudadana que es positiva para favorecer la vida en sociedad.

Dice la Exposición de motivos de la ley vigente: *“Si hubiere de fracasar (el Jurado), quizás fuere tan imputable a la falta de acierto del Juez técnico en la preparación del juicio a que le emplaza la Ley, como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud necesaria para el desempeño de la función que aquélla le asigna.”* Ante lo que yo no puedo más que estar de acuerdo. El éxito de la institución pasa por una necesaria cooperación entre jueces de Derecho y jueces de Hecho. Porque no ha de olvidarse algo explicado ya al comienzo del ensayo: el juicio por jurados está conformado por jueces de carrera y jueces legos. Una buena cooperación entre ambos no es solo deseable, es necesaria.

Me gustaría terminar mi escrito citando un nuevo párrafo de la anteriormente citada Exposición de Motivos que dice así: *“No se trata, en definitiva, de confiar en la capacidad de los ciudadanos, como si fuera tolerable en un sistema democrático la alternativa negativa. Se trata sólo de tener por superadas cualesquiera razones explicativas no ya de su discutible fracaso histórico, sino de su autoritaria y antidemocrática suspensión.”* Nuevo apartado con el que sin duda converjo en la idea de que el Jurado ha sido y es sinónimo de democracia.

Muchos mecanismos se pueden adoptar para paliar las deficiencias del Jurado. Problemas que hay que solventar mediante adecuadas reformas, una buena educación, una legislación clara y

sencilla, el pago de las correspondientes dietas, etc. Pero no porque necesite cambios eso significa, ni mucho menos, que sea deseable su desaparición. Porque si una cosa ha quedado clara a lo largo de este trabajo es que el Jurado ha sido a lo largo de nuestro país sinónimo de libertad, democracia y progreso.

## **10.RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA**

### **I. MANUALES**

- Joaquín Escriche Martín. *Diccionario razonado de legislación y Jurisprudencia*. Tomo segundo, tercera edición, P. 392 - 425. Madrid, 1847.
- Joaquín Escriche Martín. *Examen histórico-crítico de la institución del Jurado*. Madrid, 1844.
- Juan Antonio Alejandre. *La justicia popular en España. Análisis de una experiencia histórica: los tribunales de jurados*. Madrid, 1981.
- Ricardo Gómez-Rivero. *El tribunal del Jurado en Albacete (1888-1936)*. Diputación Provincial de Albacete. Albacete, 1999.
- Rafael Gibert. *El juicio por jurados en España*. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Vol 15. Madrid, 1971.
- Agustín-J Pérez Cruz Martín. *La participación popular en la Administración de Justicia: El tribunal del Jurado*. Madrid, 1992.
- M. De la Llana Vicente. *La regulación normativa del veredicto*. Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1877, 2000, p.6.
- Juan Manuel Bermúdez Requena. *Tribunal del jurado modelo y proceso: Evolución legislativa en el ordenamiento jurídico español*. Sevilla, 2007.

### **II. LEGISLACIÓN:**

#### **1. Constituciones**

- Proyecto de Estatuto Constitucional de 20 de junio de 1808.
- Constitución de Bayona de 7 de julio de 1808.
- Constitución Francesa de 13 de diciembre de 1799 (Constitución del año VIII).
- Constitución de Cádiz de 9 de marzo de 1812.
- Constitución española de 18 de junio de 1837.

- Constitución española de 23 de mayo de 1845.
- Proyecto de Constitución española de 1856.
- Acta adicional a la Constitución de 1845 de 15 de septiembre de 1856.
- Constitución española de 1 de junio de 1869.
- Proyecto de Constitución Federal de 1873.
- Constitución española de 20 de junio de 1876.
- Constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931.
- Anteproyecto de Constitución de 5 de enero de 1978
- Constitución española de 29 de diciembre de 1978.

## **2. Leyes**

- Ley de imprenta de 10 de noviembre de 1810.
- Ley de imprenta de 22 de octubre de 1820.
- Ley de imprenta de 21 de diciembre de 1855.
- Ley de imprenta de 13 de julio de 1857.
- Ley de imprenta de 22 de junio de 1864.
- Ley de imprenta de 7 de marzo de 1867.
- Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870.
- Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 22 de diciembre de 1872.
- Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 14 de octubre de 1882.
- Ley estableciendo el juicio por jurados para determinados delitos de 20 de abril de 1888.

## **3. Decretos**

- Real decreto sobre la necesidad de reformar la actual legislación de imprenta, se decreta que se observe, guarde y cumpla en todas sus partes lo citado de 10 de abril de 1844.
- Real decreto de 6 de julio de 1845 modificando o aclarando algunos artículos del de 10 de abril de 1844 relativo al uso de la libertad de imprenta.
- Real decreto de 2 de abril de 1852 estableciendo reglas para el ejercicio de la libertad de imprenta.
- Real decreto de 2 de enero de 1853 modificando el de 2 de abril de 1852 y estableciendo reglas para el ejercicio de la libertad de imprenta.
- Real decreto de 14 de octubre de 1856 mandando que solo rija y se observe la ley constitucional de la Monarquía promulgada en 23 de mayo de 1845, sin perjuicio de lo que de acuerdo con las Cortes se determine sobre las disposiciones contenidas en el Acta adicional á que se refiere el Real decreto de 15 de Setiembre último.
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- Real decreto de 20 de abril de 1888 dictando disposiciones especiales para la aplicación de la ley estableciendo el juicio por jurados para determinados delitos.
- Real decreto de 24 de septiembre de 1889 dictando disposiciones para practicar anualmente una información sobre la manera de funcionar el Jurado y determinar sus resultados.
- Real decreto de 4 de febrero de 1907 suspendiendo el juicio por jurados en los territorios de las provincias de Barcelona y Girona, limitándose la suspensión a los delitos comprendidos en los artículos del 1.º al 8.º ambos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894.
- Real decreto de 20 de agosto de 1920 suspendiendo el juicio por Jurados en el territorio de la provincia de Barcelona, en cuanto a los delitos comprendidos en los artículos 1º al 8º, ambos inclusive, de la ley de 10 de Julio de 1894 y 418 y 419 del Código penal.

- Real decreto de 21 de septiembre de 1923 suspendiendo el juicio por Jurados en todas las provincias del Reino.
- Decreto de 27 de abril de 1931 declarando restablecida la institución del Jurado, conforme a su ley orgánica de 20 de abril de 1888, con las modificaciones que se establecen.
- Decreto de 18 de junio de 1931 autorizando a la Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística para que proceda a la formación de las listas de Jurados.
- Real decreto de 11 de abril de 1931 restableciendo el funcionamiento del juicio por Jurados, suspendido por Real decreto de 21 de septiembre de 1923.
- Decreto de 22 de septiembre de 1931 disponiendo que los artículos que se mencionan de la ley del Jurado, promulgada en 20 de abril de 1888, queden redactados en la forma que se indica.
- Decreto de 27 de julio de 1933 excluyendo del número primero del artículo 4.º de la vigente ley del Jurado, los delitos que se indican.
- Decreto de 23 de agosto de 1936 creando con plena jurisdicción para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado por cualquier medio, un Tribunal especial compuesto por tres funcionarios judiciales que juzgarán como Jueces de Derecho y 14 Jurados que decidirán sobre los hechos de la causa.
- Decreto de 8 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional Española número 102 por el que se suspende el Tribunal del Jurado en todo el territorio nacional.
- Decreto de 15 de septiembre de 1936 declarando que los Tribunales especiales creados por los Decretos que se indican tendrán también competencia para conocer de los delitos militares o comunes cometidos por militares o paisanos durante las operaciones de la actual campaña.
- Decreto de 6 de octubre de 1936 creando en Madrid, con plena jurisdicción, un Tribunal especial para la exigencia y efectividad de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos de rebelión, sedición, contra la seguridad del



Estado, traición y espionaje, y para la de aquellas otras en que hayan podido incurrir los que hubieran participado en el movimiento rebelde y cuya participación pueda estimarse en virtud de indicios racionales.

- Decreto de 10 de octubre de 1936 disponiendo se constituyan en Madrid y en los lugares que el Ministro de este Departamento determine Jurados de urgencia para conocer de los hechos de hostilidad y desafección al Régimen que no sean constitutivos de los delitos previstos y sancionados en el Código penal común y en las leyes penales especiales.

### **III. DIARIO DE SESIONES, SERIE HISTÓRICA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**

- Observaciones sobre el Proyecto de Constitución de Bayona de 26 de junio de 1808.
- Actas de la Junta de la Diputación General: Junta Novena de 27 de junio de 1808.
- Diario de Sesiones de las Cortes Generales Extraordinarias, sesión de 20 de octubre de 1810, P.55.
- Diario de Sesiones de las Cortes Generales Extraordinarias, sesión de 11 de diciembre de 1811, P.2420.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 21 de julio de 1820, P. 228.
- Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 7 de agosto de 1820, P. 414 – 415.
- Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 15 de agosto de 1820, P. 522 – 526.
- Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 15 de septiembre de 1820, P. 1025 – 1027.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 26 de septiembre de 1820, P. 1260 y 1266 – 1267.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 6 de octubre de 1820, P. 1456.

- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 3 de octubre de 1820, P. 1380.
- Diario de las Sesiones de Cortes., sesión de 22 de mayo de 1869, P. 2247 – 2249.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 10 de mayo de 1886, P. 3.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 21 de abril de 1887, P. 1939.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 22 de abril de 1887, P. 1965.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 23 de abril de 1887, P. 1979.
- Diario de las Sesiones de Cortes, sesión de 25 de abril de 1887, P. 2008.
- Diario de las Sesiones de Cortes de 11 de noviembre de 1931. Apéndice 10 al diario núm. 72.
- Diario Sesiones Cortes de 1 de diciembre de 1931. Apéndice 3 al diario núm. 83.
- Diario Sesiones Cortes de 29 de enero de 1932. Apéndice 7 al diario núm. 108.
- Diario de Sesiones Cortes Constituyentes de 5 de mayo de 1933. Apéndice único al diario núm. 333.
- Diario Sesiones Cortes de 1 de octubre de 1934. Apéndice 24 al diario núm. 113.

#### **IV. OTROS**

- Circular expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia encareciendo a las Autoridades judiciales y del Ministerio fiscal la adopción inmediata de las disposiciones que crean convenientes para el planteamiento de la nueva ley de Enjuiciamiento criminal, y muy particularmente en la parte referente al Jurado de 28 de diciembre de 1872.
- Discurso de la Corona leído en la apertura de las Cortes a 10 de mayo de 1886.
- Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1889.

- Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1895.
- El Socialista, de 22 de septiembre de 1923.
- Memorias de la Fiscalía General del Estado. 15 de septiembre de 1931.